

NOMENCLATURA □□: 1. [40]Sentencia
JUZGADO □□□: 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL □□: C-26506-2017
CARATULADO □□: CORONADO ASTUDILLO / ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE
S.A. Y OTRO

Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS.

A folio 1, comparece María Celinda Coronado Astudillo, dueña de casa; Elba del Carmen Coronado Astudillo, dueña de casa; Juan Carlos Coronado Astudillo, artesano en madera; Héctor Antonio Coronado Astudillo, artesano en muebles; Gavi de Las Nieves Coronado Astudillo, artesana en cuero; Patricio Enrique Coronado Astudillo, artesano; Jaime Alberto Coronado Astudillo, artesano en fierro, y Haydee de Las Mercedes Coronado Astudillo, dueña de casa, todos domiciliados para estos efectos en Pasaje Phillips N° 16, 5° piso, Oficina X, Santiago, quienes conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, vienen en demandar al Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado don Juan Ignacio Piña Rochefort, abogado, domiciliado en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, a fin de obtener reparación integral y se les indemnicen los perjuicios sufridos a raíz del secuestro y posterior desaparecimiento de su hermano, José Abel Coronado Astudillo; y demandan también a la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa o Endesa Chile, hoy del Grupo Enel, representada por su actual Gerente General, don Valter Moro, desconocen segundo apellido, Ingeniero Mecánico, domiciliado en avenida Santa Rosa N° 76, de Santiago, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que exponen en su demanda.

A folio 17, consta la notificación del demandado Fisco de Chile y a folio 18, consta la notificación del demandado Enel Generación Chile S.A. de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 23, se contestó la demanda por el demandado Fisco de Chile.

A folio 27, se contestó la demanda por el demandado Enel Generación Chile S.A.

A folio 29, se evacuó la réplica de la parte demandante, escrito que fue corregido en presentación de folio 35, atendido lo ordenado por el Tribunal.

A folio 37, se evacuó la réplica de la parte demandada, únicamente reiterando lo señalado en la contestación de la demanda.

A folio 39, se evacuó la réplica de la parte demandada Enel Generación Chile S.A.

A folio 53, se recibió la causa a prueba, modificándose por el auto que rola a folio 84, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos.

A folio 128, se citó a las partes a oír sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

CONSIDERANDO.

EN CUANTO A LAS TACHAS.

PRIMERO. Que, a folio 122 compareció doña Rosa Inés Santana Figueroa, contra quien se dedujeron las tachas contempladas en los números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, señalando la demandada Enel Generación Chile S.A. en cuanto a la primera causal, que de las respuestas a las preguntas de tachas a la testigo habría quedado claro que ella carece de la imparcialidad necesaria para declarar, tendiendo interés directo o al menos indirecto, en la causa de autos, pues ha reconocido mantener una causa vigente en contra de su representada correspondiente con la causa caratulada Arias con Fisco que actualmente se encuentra pendiente de resolución bajo el Rol 7947-2020 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago; la testigo ha indicado además, que en dicha causa pretende obtener una indemnización de carácter pecuniario por hechos relacionados con esta causa en la que se presenta como testigo, a saber, el llamado episodio Endesa. Respecto a la causal contemplada en el numeral 7, refiere que esta se configuraría en dos sentidos. El primero, porque la testigo declara tener una íntima amistad de años con los demandantes, la que mantiene hasta la actualidad, en que se llaman y hablan todos los días, comparten sufrimientos comunes y lloran mucho. El segundo, porque existen antecedentes graves de enemistad manifiesta en contra de Enel, la que se manifiesta en mantenerse una demanda en contra de esta por su presunta participación en la desaparición del padre de la testigo. En mérito de lo anterior solicita se acojan las tachas opuestas restándole todo valor probatorio a la testigo.

Evacuando el traslado conferido, señala que no se deduce de las declaraciones de la testigo ni la enemistad en contra de Endesa, ni la amistad con la demandada. Señala que conoce a la familia, conoce a la demandante Gavi Coronado, pero no afecta ni constituye una amistad íntima que pueda despojar de imparcialidad. Va a declarar lo que conoce por la razón que la conoce y nadie mejor podría declarar que quien ha compartido una pena y la ha acompañado. Es una garantía de conocimiento de los hechos que declara.

SEGUNDO. Que, a folio 122 compareció doña Lilian Arias Vergara, contra quien se dedujeron las tachas contempladas en los números 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, señalando en cuanto a la causal contemplada en el número 6, que al tenor de las respuestas a las preguntas de tacha, queda claro que la testigo carece de imparcialidad para declarar, tendiendo interés directo o al menos indirecto en la causa de autos, pues ha reconocido mantener una causa



vigente en contra de su representada, correspondiente a la causa caratulada Arias con Fisco que actualmente se encuentra pendiente de resolución, bajo el Rol 7947-2020 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago. Además la testigo indicó que en dicha causa pretende obtener una indemnización de carácter pecuniario por hechos relacionados con la causa de la cual se le presenta ahora como testigo, a saber, el llamado episodio Endesa. En segundo lugar, respeto a la causal del numeral 7, indica que existen antecedentes graves de enemistad que manifiesta en contra de Enel, como es mantener una demanda en contra de esta por su presunta participación en la desaparición de su padre. En mérito de lo anterior, solicita se acojan las tachas opuestas restándole todo valor probatorio a la testigo. Evacuando el traslado conferido, la demandante solicita su rechazo señalando en primer lugar, que el pretendido interés directo o indirecto en el resultado de este juicio, que se deduciría de los dichos de la testigo, no tiene ningún asidero. Indica que la existencia de una causa diversa en que la testigo pueda ser demandante por hechos derivados del “Episodio Endesa”, en que se investiga la detención de trabajadores en instalaciones de esa empresa, no produce ningún efecto de interés en esta causa, no solamente porque se trata de personas y juicios diversos, sino también por el efecto relativo de la sentencia, ya que una y otra causa están sometidas a procedimientos diversos. En cuanto a lo segundo, señala que el interés de la testigo es por justicia, no interés económico, tal como ella misma manifestó. No hay interés económico, sino saber dónde están los desaparecidos. De los dichos de la testigo no se advierte enemistad con la demanda, sino un interés de saber la verdad, no hay enemistad contra Endesa sino el conocimiento de que en sus instalaciones se produjo la desaparición de sus familiares.

TERCERO. Que, la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil sólo se satisface en cuanto las respuestas a las preguntas de tachas, o la prueba que eventualmente llegue a rendirse, demuestre que los declarantes se hallan en la posición actual de enriquecerse patrimonialmente con el acogimiento de la demandada de quien lo presenta a declarar, o de librarse de un empobrecimiento pecuniario en el mismo caso, es decir, debe haber un interés actual y patrimonial en la declaración de las testigos; nada de lo cual sucede en la especie, puesto que ambas han declarado que su interés, es que se haga justicia. Las razones precedentes, conducen al rechazo de las tachas opuestas por esta causal, tal como se consignará en lo dispositivo de esta sentencia.

En cuanto a la causal del N°7 artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esta requiere explícitamente que “La amistad o enemistad deberán ser manifestadas



por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias”. En esta, la causal se funda en la desconfianza que el legislador anticipa sobre el testimonio de quien se encuentra sujeto a un vínculo íntimo de amistad con la parte que lo presenta o a una enemistad manifiesta, entendiendo que dicho vínculo le privará de la libertad para dar un testimonio fidedigno sobre los sucesos que dice haber percibido.

Respecto a la declaración de la testigo Rosa Inés Santana Figueroa, cabe señalar que esta sentenciadora estima que de las respuestas a las preguntas de tacha, si se presenta el vínculo de amistad íntima, una relación estrecha que evidencia un alto grado de confianza en la que señala “nos llamamos todos los días”, por lo que se acogerá la causal de tacha respecto a esta testigo, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Respecto a la declaración de la testigo Lilian Arias Vergara, cabe señalar que la sola declaración de la testigo, en cuanto a conocer a los demandantes y su familia, no configura un antecedente grave de la amistad alegada, toda vez que aparte de señalar que les tocó hacer una denuncia juntos, no aparecen otras circunstancias que den cuenta de una amistad íntima, causal que debe ser actual, y manifestarse por hechos graves y calificados. En cuanto a la manifiesta enemistad hacia la demandada Enel Chile S.A., esto tampoco concurre en la especie, ya que de acuerdo a la declaración del testigo, sólo hace referencia a mantener una causa en la que estaría involucrada la demandada y que su interés no es económico, sino moral, circunstancia que a este tribunal le parece insuficiente para considerar afectada su imparcialidad, teniendo además presente que las hipótesis de inhabilidad planteadas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, son de interpretación restrictiva, por lo que se rechazará la tacha deducida a este respecto cómo se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, encontrándose la testigo en libertad de prestar su testimonio

EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO. Que, los demandantes exponen ser hermanos de doble conjunción de José Abel Coronado Astudillo, quien fue detenido el 17 de Septiembre de 1973, alrededor de las 07:30 horas, en su domicilio ubicado al interior de la Central "El Abanico", Los Ángeles, por una patrulla de Carabineros pertenecientes a la dotación de la Tenencia "El Abanico". Refiere que este había nacido el 19 de Diciembre de 1952, y al momento de su detención tenía 20 años y 9 meses de edad, había ingresado a trabajar para la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y vivía en un campamento de esa empresa, ubicado al interior de la central Hidroeléctrica El Abanico, en la zona cordillerana de Los Ángeles.



Indican que después de su detención y pese a las gestiones, judiciales y extrajudiciales de la familia, especialmente de su padre y de su madre, hoy fallecidos, el hermano de los demandantes no apareció jamás, como tampoco ha sido encontrado su cadáver. José Abel Coronado Astudillo fue reconocido como detenido desaparecido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y fue declarado judicialmente como víctima del delito de secuestro calificado por sentencia ejecutoriada en causa penal Rol N° 2.182-98 (Episodio Endesa), de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, seguida ante el Ministro de Fuero don Jorge Zepeda Arancibia.

Hacen presente que revisten la calidad de partes lesionadas por dicho delito en cuyo mérito dirigen la presente acción civil de reparación e indemnización de perjuicios en contra de las personas jurídicas civilmente responsable del mismo.

Respecto a los hechos concretos que fundamentan su acción, se refieren en primer lugar a la Sentencia condenatoria en contra de Agentes del Estado, y ejecutoria de la misma.

Señalan que el delito de que fue víctima don José Abel Coronado Astudillo es el de secuestro calificado y se encuentra pormenorizadamente descrito, establecido y determinado por sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de Noviembre de 2010, dictada en los autos Rol 2.182-98, (Episodio Endesa) por don Jorge Zepeda Arancibia, Ministro de Fuero, la que fue modificada parcialmente en cuanto a los acusados por la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 25 de octubre de 2013. A su vez, la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 23 de octubre de 2014, rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Exponen que las referidas sentencias, insertas en el proceso penal conocido desde su carátula como “Episodio Endesa” comprenden a un total de 22 víctimas, de los cuales 7 de ellas son víctimas del delito de homicidio calificado y 15 por secuestro calificado. De las 22 víctimas individualizadas, 12 eran trabajadores de Endesa. La presente acción civil indemnizatoria sólo comprende a la familia de una de las víctimas de secuestro calificado, quien era trabajador de Endesa a la fecha de su secuestro y posterior desaparición forzada.

Advierten que por estos gravísimos delitos, considerados delitos de lesa humanidad, fueron condenados en sentencia de segunda instancia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el Mayor del Ejército -al año 1973- Patricio Gustavo Martínez Moena, como autor de los delitos de homicidios calificados y de secuestros calificados, entre otros, de los trabajadores de Endesa José Abel Coronado Astudillo, y otros 11 trabajadores. Esta misma sentencia,



condenó al Teniente -al año 1973- Walter Klug Rivera, en calidad de cómplice de los mismos ilícitos. Ambos Oficiales del Ejército, individualizados precedentemente, formaban parte del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado de Los Ángeles. La sentencia de término se encuentra debidamente ejecutoriada.

Ilustran que en la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, del Ministro don Jorge Zepeda, la primera referencia que se hace a los hechos materia de la investigación penal, se señala:

“Denuncia de fojas 52, de María Raquel Mejías por los delitos de homicidio, asociación ilícita, e inhumación ilegal en perjuicio de VICTOR JEREZ MEZA; señala que éste fue detenido el 22 de septiembre de 1973, en el interior de las oficinas de la central El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad Endesa, en la comuna de Antuco, Provincia de Bio Bio, a esa época era Presidente del Sindicato Obrero Industrial de dicha central y militaba en el Partido Socialista. Tenía 31 años de edad, era casado con doña Olga Eliana Aedo Paredes y padre de tres hijos. Vivía con su grupo familiar en una población de El Abanico, destinada a los obreros de las centrales. Añade la denunciante que de acuerdo a los antecedentes entregados por testigos a organismos de Derechos Humanos, su detención fue practicada por Carabineros que tenían su centro de operaciones en el Retén de El Abanico y presenciada por ejecutivos y empleados de Endesa. Fue llevado en una camioneta al recinto policial cuyo jefe era don Zacarías Hanover García Agüero, y que en esos días contaba con dotación tanto de Carabineros, como de otras personas, algunos Carabineros y otros vestidos de civil, que no eran de lugar. Allí fue visto por un compañero de trabajo quien también fue detenido, al medio día del 22 de septiembre de 1973. Agrega que en días anteriores a la detención de VICTOR JEREZ MEZA habían sido detenidos MARIO BELMAR SOTO, el 14 de septiembre de 1973, ABRAHAM LOPEZ PINTO, el 16 de septiembre de 1973. JOSE ABEL CORONADO ASTUDILLO el 17 de septiembre de 1973. MARIO SAMUEL OLIVARES PEREZ, el 17 de septiembre de 1973; ALAMIRO SEGUNDO SANTANA FIGUEROA el 17 de septiembre de 1973; LUIS LEOPOLDO SEPULVEDA NUÑEZ, el 17 de septiembre de 1973; PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES, el 21 de septiembre de 1973; WILFREDO HERNAN QUIROZ PEREIRA el 21 de septiembre de 1973; todos residentes en el sector cordillerano de Los Ángeles y ligados a las actividades de la empresa Endesa, y todos desaparecidos.”

Continúa esta sentencia en su parte expositiva, señalando entre los antecedentes reunidos en la investigación que:



“A fojas 695 rolan compulsas ordenadas sacar en recursos de amparo, por medio del cual se ordena investigar judicialmente la detención y posterior desaparecimiento de JOSE ABEL CORONADO ASTUDILLO.

A fojas 698 vuelta, tomo II, rola declaración de José Alejandro Coronado Coronado, quien señala que su hijo JOSE ABEL CORONADO ASTUDILLO, según supo por comentarios, fue detenido el 17 de septiembre de 1973, por una patrulla, en su domicilio en central Abanico.

Lista de fojas 1135, tomo II, de víctimas de la VIII, entregada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.”

Indican que en la primera relación de los hechos, se mencionan a 9 trabajadores de Endesa, algunos de ellos dirigentes sindicales, cuya represión comenzó el viernes 14 de septiembre de 1973 (tres días después del martes 11 de septiembre), en la que participaron Carabineros del Reten El Abanico, lugar donde vivían trabajadores de Endesa (“...una población de El Abanico, destinadas a los obreros de las centrales...”), junto a otras personas, vestidas de civil, que no eran del lugar. Todos desaparecidos al iniciarse la causa penal, aunque después se pudiera identificar el cuerpo de uno de ellos, don Víctor Jerez Meza.

En la parte Considerativa de la sentencia definitiva de primera instancia, de 18 de noviembre de 2010, del Ministro don Jorge Zepeda, luego de identificar a las víctimas de los reiterados delitos de homicidio calificado y de secuestro calificado, analiza los elementos de prueba para dar por acreditados los hechos delictivos y los responsables de la comisión de esos ilícitos.

El Considerando Primero identifica a las víctimas de los ilícitos investigado en ese proceso penal, estableciendo que:

“1.- En cuanto a los delitos reiterados de homicidio calificado y secuestro calificados.

PRIMERO: a) Que en relación con los delitos de homicidio calificado en las personas de: 1) JUAN MIGUEL YAÑEZ FRANCO, 2) CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA. 3) VICTOR JEREZ MEZA, 4) MARIO BELMAR SOTO. 5) MARIO SAMUEL OLIVARES PÉREZ, 6) JUAN ELADIO ULLOA PINO y de 7) VÍCTOR ADOLFO ULLOA PINO, previstos y sancionados en el artículo 391 N° 1 del Código Penal; y b) los de secuestro de: 8) ABRAHAM LÓPEZ PINTO, 9) JOSÉ ABEL CORONADO ASTUDILLO, 10) ABEL JOSE CARRASCO VARGAS. 11) ALAMIRO SEGUNDO SANTANA FIGUEROA, 12) LUIS LEOPOLDO SEPÚLVEDA NUÑEZ. 13) PLUTARCO COUSSY BENAVIDES, 14) WILFREDO HERNÁN QUIROZ PEREIRA, 15) EXEQUIEL DEL CARMEN VERDEJO VERDEJO, 16) DOMINGO NORAMBUENA INOSTROZA, 17) LUIS EDUARDO VERGARA CORSO, 18) BENJAMIN ANTONIO ORREGO LILLO, 19) JOSE OSCAR BADILLA



GARCIA, MANUEL ANTONIO AGUILERA AGUILERA, 20) MANUEL SEPÚLVEDA CERDA, 21) BERNARDO SAMUEL MEZA RUBTLAR y de 22) MANUEL JESÚS ARIAS ZUÑIGA, previstos y sancionado en el artículo 141 N° 1 y 4 del Código Penal, se han reunido los siguientes elementos de prueba:”

El Considerando Segundo de la sentencia de primera instancia expresa:

“SEGUNDO: Que el acopio de elementos de prueba analizados en el fundamento anterior, constituyen otras tantas presunciones judiciales que, valoradas conforme a lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, hacen plena prueba y acreditan fehacientemente los siguientes hechos:

a)□Que el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA. (Página 18 de la sentencia)

b)□Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de 1973, su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de “Los Canelos”, “Reyenco”, “Polcura”, “Antuco”, además de campamentos de trabajo de la Centrales Hidroeléctricas de “El Toro”, “El Abanico”, y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de “Cuatro Juntas”, sector que era denominado “Mallines del Sol”, perteneciente al cajón del Alto Polcura”, patronímico del río “Polcura”, que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales, (página 18 de la sentencia)

c)□Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agente del Estado, bajo pretexto de que la víctima pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/ o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy. (Página 18 de la sentencia)

d) a h) (.... La sentencia enumera en estos literales los antecedentes para dar por acreditados los delitos en contra de otras víctimas)



i) Que ese mismo 17 de septiembre, aproximadamente a las 07:30 horas, es detenido en su domicilio ABEL JOSE CORONADO ASTUDILLO, siendo llevado al Retén El Abanico, donde fue visto por última vez por su hermano Juan Carlos Coronado Astudillo.”

Señalan que el Considerando Tercero de la referida sentencia penal califica jurídicamente los hechos punibles como homicidio calificado respecto de las 7 primeras víctimas que individualiza y de secuestro calificado respecto de las personas hasta el presente desaparecidas, entre ellas, José Abel Coronado Astudillo, y agregan que del considerando Cuatro al Duodécimo el sentenciador funda la calificación que hace de los ilícitos penales señalados precedentemente como delitos de lesa humanidad, pues “los delitos no solo lesionan los derechos fundamentales de la vida y de la libertad de las víctimas, respectivamente, en cuanto constituyen el propósito final de darles muertes y hacerles desaparecer definitivamente, sino que constituyen a la vez delitos de lesa humanidad o contra la humanidad castigados por el Derecho Penal Universal de los Derechos Humano, en el contexto de conducta de medio o instrumento, efectuado dentro de una política masiva y a escala general de privación de la vida y de la libertad de un grupo numeroso de civiles a los que en la fecha inmediata y posterior al 11 de septiembre de 1973, se les sindicó en ese entonces que tenían la condición de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto en Chile y se procede a darles muerte o hacerlos desaparecer sistemáticamente”. (Considerando Cuatro, página 21 de la sentencia)

Por último, destacan la reflexión que contiene el Considerando Undécimo de la sentencia penal de primera instancia:

“Que, en consecuencia puede aseverarse que en el caso, se está en presencia de delitos de lesa humanidad; en efecto, la acción directa en ellos de agentes del Estado quienes actuando en contra de las víctimas, estando éstas ya detenidas por los funcionarios estatales bajo la obligación de éstos de garantizar la seguridad e integridad física de ellas, no obstante a unas les dan muerte u a otras las mantienen privadas de la libertad, terminando esta últimas por desaparecer hasta hoy con el fin inmediato en ese entonces, de atemorizar al grupo de la población civil a la que las víctima pertenecen.

Que de este modo los delitos aparecen cometidos mediante la actuación activa de los agentes del Estado primer elemento constitutivo del delito de lesa humanidad. Enseguida aparece como segundo elemento constitutivo del delito en contra de la humanidad que los hechos delictivos se dieron en el contexto de un plan o política o la ejecución de los mismos conforme a un modo de actuar planificada.



Este segundo elemento es el que permite calificar los hechos como delito de lesa humanidad, esto es, ser éstos “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, o parte de ella, con conocimiento de dicho ataque”, (página 26 de la sentencia)

En definitiva, señalan, el ex Mayor Patricio Gustavo Martínez Moena fue condenado como autor de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado; como cómplice de los mismos delitos el ex Teniente Walter Klug Rivera; y como autor de secuestro calificado al ex Teniente Ismael Humberto Espinoza Silva. Los dos primeros, autor y cómplice de los delitos de secuestro calificado, ente otros de José Abel Coronado Astudillo, trabajador de Endesa S.A.

A continuación, se refieren a la información recogida, investigada y considerada fundadamente como veraz por la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig.

Hacen una reseña sobre la constitución de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la elaboración del informe entregado al Presidente de la República, que pasó a ser conocido como Informe Rettig, haciendo referencia a continuación, sólo a parte del mismo, limitado a algunas localidades de la Provincia del Bío Bío, de la VIII Región, en que se mencionan los casos investigados en la causa penal Rol N° 2182-98, Episodio Endesa, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de ese mismo año, todas ellas con resultado de muerte o desaparición y donde la Comisión adquirió convicción de que existió responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio:

“Provincia de Bío Bío

“Característica relevante de esta provincia es la activa participación de civiles en los distintos actos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período. “Otra particularidad de esta provincia es que en general la violencia política después del 11 de septiembre, está dada por el clima de violencia anterior imperante a raíz de las tensiones que generó el proceso de la reforma agraria.

“La práctica de la tortura es generalizada, especialmente en el Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 Los Ángeles, en el cual se procede con excesiva violencia en contra de los detenidos y es habitual la tortura en las sesiones de interrogatorio. El SIM está a cargo de los detenidos en este recinto militar. El transporte de los detenidos se hacía colocándoles boca abajo sobre el piso de los camiones militares y luego se iba poniendo más personas, en la misma posición, unas sobre otras. De esta forma los que se encontraban abajo llegaban a destino en muy malas condiciones o simplemente muertos.



“Fue de uso frecuente la práctica de no entregar los cadáveres a los familiares, en consecuencia son muchos los casos de personas que se encuentran desaparecidas. Habitualmente se procedía a arrojar los cuerpos a los numerosos y caudalosos ríos de la zona, especialmente el Bío Bío, Rarínco, Renaico y Bureo.

“El Ejército y Carabineros son los encargados de mantener el control del orden público en la provincia. Son efectivos de Carabineros, en las distintas localidades de la misma, quienes se encuentran más directamente relacionados en los casos de detenidos desaparecidos y de muertes fuera de proceso.

“No se conocen antecedentes sobre la existencia de Consejos de Guerra con condenas a muerte en la provincia Bío Bío.

“En la ciudad de Los Ángeles funcionaron varios centros de detención, ya que esta ciudad concentró a la mayoría de los detenidos de la provincia, transformándose en lugar de tránsito de muchos prisioneros que iban hacia distintos recintos de la Región o del país, especialmente hacia Concepción.

“Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 Los Ángeles. Los detenidos eran 323, de los cuales 1 era uruguayo, en el mes de noviembre de 1973. Los detenidos estaban alojados en 6 dormitorios del edificio de las caballerizas. Las celdas eran de 6x7 metros y alojaban a 60 personas. El piso era de concreto y el techo de planchas de zinc. También hay una carpa de 8x4 metros donde son puestos aquellos detenidos que van a ser liberados. También se utiliza como celda una casita, mal ventilada, de 8x12 metros cercanos al edificio principal. Los detenidos duermen sobre el mismo piso. Las condiciones generales son de hacinamiento y falta de medidas de higiene. La alimentación es insuficiente.

“Este recinto fue el principal centro de detención de la provincia. A él concurrían detenidos de toda la zona, aprehendidos tanto por militares como por carabineros. En este recinto fueron frecuentes las ejecuciones extrajudiciales y el uso de la tortura practicada por personal del SIM, carabineros y según testimonios verosímiles, por civiles, según los relatos de ex-presos de ese recinto. El lugar donde se practicaban los “interrogatorios” era la oficina de la Ayudantía del regimiento.

“Prisión de Los Ángeles (actual centro de detención preventiva). En noviembre de 1973 había 80 detenidos a disposición de las autoridades militares, más los reos comunes, con un número ascendiente a 213. Las condiciones generales eran de hacinamiento y falta de camas. La comida era insuficiente para la población del penal. “Casa del Buen Pastor de Los Ángeles. En el mes de noviembre había 21 detenidas, una de ellas española. Las condiciones generales del recinto son buenas.



También en la ciudad hubo otros centros de detención, los cuales tuvieron el carácter de transitorios y de ellos se derivaron los detenidos a centros más permanentes: Liceo de Hombres, Gimnasio de IANSA, Liceo Alemán. (Informe Rettig, Volumen I, Tercera Parte, páginas 338 y 339).

“Los Ángeles

“El 17 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio ubicado en la Central El Abanico, José Abel CORONADO ASTUDILLO, 20 años, obrero de Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Los aprehensores eran carabineros del sector El Abanico. Las autoridades policiales señalaron a su familia que había sido trasladado al Regimiento de Los Ángeles. En el Regimiento se le informa a la familia que José Coronado se encontraba allí, ante lo cual durante un mes le llevaron útiles de aseo; sin embargo, tiempo después se niega su estadía en dicho recinto. Hasta la fecha permanece desaparecido.

“La Comisión se ha formado convicción que la desaparición de José Coronado constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. Se basa esta convicción en que está acreditado su arresto y en que no es aceptable la falta de explicaciones de la autoridad que lo tenía bajo su control acerca de su destino. (Informe Rettig, página 341).

En tercer lugar, señala como fuente complementaria y de alta credibilidad, la información contenida en la página web de Memoriaviva, fuente abierta de información, que refleja con mayor visibilidad al vía crucis de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos e indican lo siguiente:

JOSE ABEL CORONADO ASTUDILLO

Rut: Sin información

F.Nacim: 19 12 52, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio: Casa 29, Población John Kennedy, Talca

E. Civil: Casado (indican que esto corresponde a un error, pues era soltero)

Actividad: Obrero de la Central Eléctrica "El Abanico" de ENDESA.

C.Repres.: Sin militancia política

F.Detenc.: 17 de septiembre de 1973

José Abel Coronado Astudillo, 20 años de edad, casado, obrero de la Central Eléctrica "El Abanico" de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA, sin militancia política, fue detenido con fecha 17 de septiembre de 1973, alrededor de las 07:30 horas, en su domicilio ubicado al Interior de la Central "El Abanico", Los Ángeles, por una patrulla de Carabineros pertenecientes a la dotación de la Tenencia "El Abanico".



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

La autoridad policial informó a la familia del afectado, que éste fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles, sin embargo, en ese recinto no se reconoció la detención.

Doña María Celinda Astudillo González, madre del afectado, ha señalado en declaración jurada suscrita ante notario, que la detención de José Abel Coronado Astudillo, ocurrió el día 17 de septiembre de 1973, en su antiguo domicilio ubicado en la Central "El Abanico" en Los Ángeles, y que en esa oportunidad detuvieron igualmente a sus hijos Celso y Juan Carlos Coronado Astudillo. La detención fue practicada por el Teniente Aslo García Agüero, el Sargento Segundo Arriagada y dos Cabos ambos de apellido Contreras, todos pertenecientes a la Tenencia de Carabineros de esa localidad. En la causa rol 46.723, por el desaparecimiento de Wilfredo Quiroz Pereira, se determinó que la identidad de dicho Teniente es Zacarías Hannower García Agüero.

Tanto Celso como Juan Carlos fueron dejados en libertad ese mismo día. Al momento de la detención del afectado, el Teniente García Agüero señaló que lo detenían porque buscaban a un tal Juan Tirapey, agrega la testigo, "que cuando éste apareciera quedaría en libertad mi hijo, lo que no fue así, ya que Tirapey se entregó a los 8 días después de la detención de mi hijo" y no obstante el afectado no recobró su libertad.

En la misma declaración jurada, la madre expresa que "el Teniente García Agüero, me manifestó en varias ocasiones que mi hijo lo habían entregado el mismo día de su detención, a las 17:00 horas, al Regimiento de Los Ángeles".

Cabe hacer presente que el día 22 de septiembre de 1973 fue detenido el Presidente del Sindicato de la Central "El Abanico", Víctor Jerez Meza, actualmente desaparecido.

En el mes de febrero de 1975, la madre envió una carta al Alcaide de la Cárcel Pública de Los Ángeles, consultando acerca del ingreso de su hijo a tal establecimiento. El Alcaide respondió que, consultados los registros estadísticos del penal, no aparecía el ingreso de Coronado Astudillo al establecimiento, en ninguna época.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Con fecha 27 de agosto de 1974, don José Alejandro Coronado, interpuso un recurso de amparo en favor de su hijo, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rolando con el N°3.136.

Habiéndose obtenido la información de los Tribunales del Crimen de Los Ángeles, en orden a no existir procesos en contra del amparado ni haberse dictado orden en su contra, como asimismo los informes de las autoridades Militares y de Carabineros quienes señalaron no tener antecedentes sobre José Abel Coronado



Astudillo, la Corte de Apelaciones con fecha 13 de septiembre de 1974, declaró sin lugar el recurso de amparo, ordenando oficiar al Juzgado de Turno de Los Ángeles para que se instruya el proceso por presunta desgracia del afectado.

De esta manera, con fecha 24 de septiembre de 1974, ante el Primer Juzgado del Crimen de Los Ángeles se inició la causa rol 46.261. Al comparecer don José Alejandro Coronado, ratificó lo señalado en el recurso de amparo interpuesto en favor de su hijo, además señaló a tres personas que supuestamente pudieron haber sido detenidos junto al afectado. Estos últimos al comparecer al tribunal coincidieron en haber sido detenido por carabineros, por ebriedad, pero no recordaron haber estado detenidos junto a Coronado Astudillo. Con fecha 20 de agosto de 1975 se declaró cerrado el sumario, sobreseyéndose temporalmente la causa recién con fecha 4 de agosto de 1976 por "encontrarse trasapelado entre las causas de pre archivo".

La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo en consulta de dicha resolución señaló: "teniendo únicamente presente que no se ha acreditado en autos que el hecho denunciado sea la consecuencia de un delito, se aprueba en lo consultado la resolución de veinte de agosto del año pasado..."

José Abel Coronado Astudillo, permanece a la fecha en calidad de detenido desaparecido."

Por último, hace referencia al Testimonio personal de los actores de la presente causa sobre la afectación causada a ellos como víctimas.

Relatan que la familia Coronado Astudillo, compuesta por el padre, don José Alejandro Coronado Geldes y su esposa, doña María Celinda Astudillo González, ambos fallecidos a esta fecha, y la mayor parte de sus hijos vivían en la población de los trabajadores de Endesa en El Abanico. Su padre trabajaba como carpintero, era prácticamente analfabeto y su madre era dueña de casa. Solamente Héctor, de 15 años no vivía con sus padres sino en la ciudad Talca.

Refieren que su hermano, Abel José, ingresó a trabajar a la Central de El Abanico meses antes del Golpe de Estado. Con su salario ayudaba a sus padres. No tenía militancia política si bien adhería al Gobierno de Salvador Allende y participaba en el Sindicato de la Empresa. Fue detenido el 17 de Septiembre de 1973 alrededor de las 07:00 AM, junto a sus hermanos Celso, de entonces de 22 años, actualmente fallecido y a su hermano Juan Carlos, a la sazón de 17 años, demandante en esta causa.

Exponen que cuando detuvieron a los tres hermanos, los Carabineros, que se movilizaban en una camioneta de ENDESA les dijeron que habían sido denunciados por los ejecutivos de esa empresa, como extremistas y que querían



volar el tranque de la Central Hidroeléctrica. En la Comisaría los tres hermanos fueron encerrados en distintas celdas.

Más tarde Juan Carlos relataría como fue colgado por los pies, y usado como puching-ball mientras le exigían confesar que era terrorista y que planeaba volar la Central Hidroeléctrica, junto a sus hermanos y a otras personas. Con la culata de un arma le pegaron en la cara y le volaron dos dientes superiores. Perdió el conocimiento. Al despertar se encontró nuevamente en una celda, sin saber de sus hermanos. Fue nuevamente interrogado, pero esta vez sin tortura. Siempre exigiendo que reconociera que era un extremista, terrorista. Finalmente, después de varios días, fue entregado a la familia, junto a su hermano Celso. El Teniente a cargo de la Comisaría le dijo a la madre que más valía que se fuera con su familia a otra localidad.

Juan Carlos y Celso tenían lesiones en todo el cuerpo. Nunca supieron que había pasado con Abel José, del cual habían sido separados cuando llegaron a la Comisaría. Ellos fueron las últimas personas de la familia que vieron al joven José Abel con vida.

Prosiguen el relato señalando que la familia buscó a José Abel por todas partes. Les dijeron que lo habían trasladado a Los Ángeles, a Concepción, a la Isla Quinquina. En todas partes negaban haberlo visto. Al regresar Celso y Juan Carlos a su hogar y ver el estado en que estaban, su familia, los llevó a la Cordillera, en Marrigüe, para que se escondieran y no volvieran a detenerlos. Estuvieron más de dos meses escondidos. La familia les mandaba alimentos cuando podían. Pasaron hambre y frío. Unos campesinos conocidos los curaban con emplastos de hierbas. Dos meses y medio más tarde, a fines del año 1973, volvieron a su hogar.

Señalan que la familia decidió irse de Abanico y volver a Talca, de donde eran originarios. Tratar de empezar de nuevo. Todos de alguna manera a trabajar en lo que se podía. Vivir con el temor y la angustia por el hijo y el hermano desaparecido, además del temor de que detuvieran nuevamente a algún hijo. Refieren haber experimentado la angustia propia y la de sus padres que buscaban y lloraban al hijo desaparecido, sin olvidar nunca.

Agregan que cada uno de ellos, viven el estigma de las detenciones y del desaparecimiento de su hermano, la búsqueda de lo que le había pasado o siquiera encontrar su cuerpo. Señalan que para Juan Carlos y Celso, fue especialmente difícil, ya que habían vivido en parte, la agonía de su hermano, aunque ellos sobrevivieran. Actualmente Juan Carlos se encuentra reconocido por la Comisión Valech, como víctima de Prisión Política y Tortura.



Añaden que sus padres fallecieron con la pena del hijo desaparecido, de la que nunca se recuperaron como familia y que como familia comparten el dolor de muchas otras víctimas de la represión política.

A continuación, expone que la presente demanda civil de reparación e indemnización se dirige contra el Fisco de Chile y contra la Empresa Nacional de Electricidad S.A.

En cuanto al primer sujeto pasivo de la acción de autos, de acuerdo a nuestra legislación, habiendo actuado los condenados, todos a la sazón oficiales del Ejército de Chile, en su calidad de agentes del Estado, según se encuentra establecido en la sentencia penal ejecutoriada en la citada causa Rol N° 2.182-98, la presente acción preparatoria e indemnizatoria se dirige en contra del Fisco de Chile.

Explican que las actuaciones de estos agentes, siguiendo las directrices y órdenes de quienes se tomaron el poder del Estado, constituyendo la Junta Militar de Gobierno, acarrea la responsabilidad, entre otras, la civil, por los delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de las víctimas de los ilícitos de secuestros calificados, considerados internacionalmente como delitos de desaparición forzosa de personas y obliga al Fisco de Chile a reparar integralmente los perjuicios que se siguieron del actuar de los agentes, por así exigirlo la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanitarios y de derechos humanos, siendo la responsabilidad, no sólo la de orden penal sino también la civil, imprescriptibles.

En cuanto al segundo sujeto pasivo de la acción ejercida, esto es, la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa S.A., también Endesa Chile, a la fecha que ocurrieron todos los ilícitos denunciados en el referido proceso penal era una de las empresa de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, perteneciente al Estado de Chile, con un estatuto jurídico propio, que le permitía una administración autónoma, de alto nivel profesional, que junto a otras fue la principal promotora del proceso de industrialización de Chile. A causa del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas tomaron el control de esta empresa, exonerando a sus autoridades y nombrando a otras, pertenecientes a las Fuerzas Armadas en servicio activo y otras jubilados de las mismas. Al final del período dictatorial, esta empresa fue privatizada, siendo continuadora legal de Endesa S.A. y de todo su patrimonio.

Advierte que los agentes de esta empresa, hoy privatizada, jugaron un rol fundamental en la cruenta y odiosa persecución de la que fueron trabajadores de Endesa S.A. de la central hidroeléctrica Abanico, entre otros el obrero de 20 años



José Abel Coronado, sin militancia política, así como sus dirigentes sindicales. Actuaron en concomitancia con otros civiles, en una activa colaboración con los agentes represivos en la zona, principalmente militares y carabineros, y como informa la Comisión Rettig, contaron con la activa participación de miembros políticos de extrema derecha y otros actores productivos que participaron en la estructura de poder de la dictadura cívico militar. Afirmo que bastaría leer la sentencia penal de primera instancia del llamado “Episodio Endesa” y la contestación de la acusación del teniente Walter Klug para comprender el importante rol que jugaron civiles, con gravitantes influencias en el actor militar, en la represión criminal.

Señala que si bien el proceso judicial, llevado finalmente por el Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Zepeda Arancibia, se limitó a determinar la responsabilidad penal de los uniformados partícipes de los delitos de secuestros y homicidios calificados investigados en la causa penal Rol 2.182-98 (Episodio Endesa), del análisis de todos los antecedentes reunidos en esa causa criminal no cabe la menor duda de que hubo complicidad de quienes dirigían ENDESA, ya que la dirección de la Central Abanico de Endesa fue encomendada a personas de confianza del nuevo régimen militar. En el campamento de los trabajadores, ubicado al interior de dicha Central fue detenido el hermano de los actores, de modo que la empleadora, que tenía el deber de garante de la protección de sus trabajadores, acarrea responsabilidad por la suerte de éstos, al permitir la detención.

Menciona que la Constitución Política manifiesta que la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la misma, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (inciso 2° del artículo 5°). Los preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo (Artículo 6°).

Esta obligación ha sido reconocida por la demandada Endesa, que en el Título XX de su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, afirma expresa y solemnemente:

II. □ COMPROMISO DE ENDESA CHILE DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

Art. 77°: Esta Política recoge el compromiso y las responsabilidades de Endesa Chile en relación con todos los derechos humanos, y en especial con los que afectan a nuestra actividad empresarial y a las operaciones desarrolladas por todos los Trabajadores de Endesa Chile. Endesa Chile promueve el respeto de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

derechos humanos en todas sus relaciones comerciales 1 y la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios comerciales a los mismos principios, prestando particular atención a las situaciones de conflicto y de alto riesgo. La presente Política fue aprobada por el Directorio de Endesa Chile el 26 de septiembre de 2013.

III. REFERENCIAS INTERNACIONALES

Art. 78°: Esta Política se basa en los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo:

1. La Carta Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos.

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2. Los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182, así como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

3. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.

4. El convenio de la OIT número 169 sobre los derechos de poblaciones indígenas y tribales.

También se han tenido en cuenta las versiones más recientes de las siguientes normas empresariales e iniciativas voluntarias:

1. Los principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas.

2. Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.

3. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

4. Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar".

Sin perjuicio de valorar esta declaración y compromiso por parte de la empresa, advierte que también constituye un reconocimiento de su obligación de reparar la vulneración de derechos de trabajadores suyos, en que incurrieron los ejecutivos de la empresa en el pasado, tales como la que afectó a José Abel Coronado Astudillo, detenido al interior de las instalaciones de la empresa, con la colaboración activa y/o pasiva de sus jefaturas.

Refiere que lo que la tradición jurídica llama restitutio in integrum, el restablecer la condición jurídica preexistente, inmediatamente anterior a sus detenciones, que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

habría sido la opción unánime de los demandantes, no es posible en el caso de personas que tienen la calidad de detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos nunca más fueron hallados como si el hacerlos desaparecer hiciese desaparecer la responsabilidad de los hechores del o los delitos de los que fueron victimarios.

Prolongado el dolor in extremo, marcadas las vidas de sus deudos para siempre, esperando durante años el regreso de sus seres amados o encontrar siquiera sus restos para sepultarlos con dignidad, es necesaria la reacción vigorosa de los órganos de Justicia y de aquellos que cooperan con la función jurisdiccional del Estado, no solo para impedir que la historia se vuelva a repetir, sino para que el Nunca Más no sea una promesa vacua sino una promesa cumplida.

Respecto a la acción indemnizatoria deducida, explica que de todo delito nace una acción penal para perseguir a los responsables y una acción civil tendiente a reparar los daños provocados por el ilícito. La sentencia condenatoria ya referida y ejecutoriada, da certeza jurídica de que se ha cometido en contra de José Abel Coronado el delito de Secuestro calificado, sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de que fueron víctima del hecho punible. De acuerdo a la ley, todos aquellos que acarrearán responsabilidad en un ilícito, penal o civil tienen el deber de indemnizar los daños.

Este delito, si bien cometido el año 1973, es imprescriptible de acuerdo a la legislación internacional por tratarse de un delito de lesa humanidad. Así lo establecen los pactos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre persecución y castigo de los crímenes de guerra y de las personas que han cometido delitos de lesa humanidad.

La acción civil indemnizatoria, reparatoria, es también imprescriptible ya que deriva del hecho que le da origen:

a) □ Respecto del Fisco de Chile, porque el hecho punible del secuestro, fue cometido por empleados públicos en contra de trabajadores, de personas pertenecientes a “un sector determinado de la población civil chilena”, que por razones de odio social o por ser considerados potencialmente como adversarios del nuevo régimen dictatorial se decidió eliminar por estimarlos peligrosos, además de infligir miedos a los suyos y/o cercanos como al resto de la población como forma psicosocial de sometimiento, personas todas -como lo declara una sentencia- que pasaron a tener un estatuto inferior en cuanto al trato por parte del Estado en relación al resto de los habitantes.

b) □ Respecto de la empresa Endesa S.A. por la participación, activa y/o pasiva, de sus dependientes que permitieron y/o colaboraron en la detención del trabajador, la que derivará en su secuestro y desaparición forzada. Esta colaboración era



necesaria para la detención del trabajador, detenido al interior de las instalaciones de la empresa en que trabajaba.

Los demandantes, en nuestra calidad de familiares de un detenido desaparecido, habrían sido doblemente víctimas. No solamente sin derecho alguno, de manera completamente arbitraria y abusiva se les privó de su hermano, cuyo secuestro y desaparición forzada les obligará a vivir, junto a sus padres, el dolor permanente de su ausencia, sino que respecto de las personas de su entorno social, aseguran quedar marcados discriminatoriamente, como personas peligrosas, contrarias al régimen imperante.

Hace presente que se obtuvo una justicia parcial, al sancionarse a algunos de los culpables del delito de secuestro calificado de su hermano, después de 23 años de haberse iniciado el proceso de transición a la democracia, pero lamentan que sólo 40 años más tarde se haya podido establecer verdad judicial sobre la suerte de José Abel, a pesar que su detención y desaparición forzada fue denunciado ante las autoridades y ante los tribunales ya durante la dictadura militar.

Respecto a la imprescriptibilidad de esta acción reparatoria o indemnizatoria, indican que se ha pretendido por algunos aplicar a la responsabilidad civil por las violaciones de los derechos humanos, las normas del Código Civil sobre la responsabilidad extracontractual o aquiliana, la que estatuye que ésta prescribe a los 4 años de haberse cometido el hecho ilícito (artículo 2314 del Código Civil).

Sin embargo, las normas aplicables a las indemnizaciones derivadas de delitos de lesa humanidad no son aquellas que emanan del derecho común, sino las contenidas en la Constitución Política del Estado, de los Pactos Internacionales suscritos por Chile y de las normas del Derecho Público. Así, la responsabilidad del Estado está comprometida por el Derecho Internacional Público y por el Derecho Público nacional, esto es, por la Constitución Política, el derecho penal y el derecho procesal penal.

Expone que la responsabilidad de Endesa tampoco se compromete por normas de derecho común, aunque como empleadora esté obligada por la responsabilidad contractual de las normas del Código del Trabajo respecto de la seguridad de sus trabajadores. No se trata en la especie sólo de esa fuente de responsabilidad, sino de la que emana de las normas de derecho público. No solamente porque a la fecha de ocurrir los hechos se trataba de una empresa estatal, sino también porque así lo reconoce la obligada a través de un acto propio, como es la decisión aprobada por su Directorio el 26 de septiembre de 2013, sobre Política de la empresa en materia de Derechos Humanos, plasmada en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que alude expresamente a las normas



internacionales sobre derechos humanos, la que valoran como un reconocimiento de la supremacía de los derechos de las personas también al interior y en su relación con la empresa.

A continuación se refiere al reconocimiento internacional, recibido por la legislación nacional, de la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos citando la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, el cual establece, primeramente, como obligación de los Estado el respetar y asegurar que se respeten las normas internacionales sobre derechos humanos:

1. ☐ La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:

- a) ☐ Los tratados en los que un Estado sea parte;
- b) ☐ El derecho internacional consuetudinario;
- c) ☐ El derecho interno de cada Estado.

2. ☐ Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente:

- a) ☐ Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;
- b) ☐ Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;
- c) ☐ Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;
- d) ☐ Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

La fuente jurídica del deber de reparación radica en el derecho internacional, siendo obligación del Estado incorporar a su derecho interno las normas internacionales, y de acuerdo al Capítulo II, “Alcance de la obligación”, numeral 3), de la referida Resolución de la Asamblea General, el deber de:

- c) ☐ Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y

d) ☐ Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.

Sobre la imprescriptibilidad de la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005 sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos [...] a interponer recursos y obtener reparaciones” resuelve en materia de la eventual Prescripción de esta obligación literalmente, lo siguiente:

IV. ☐ Prescripción

6. ☐ Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.

7. ☐ Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.

Advierte, cuando se está frente a crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no hay prescripción. Sobre otros tipos de violaciones que no constituyen crímenes, la normativa internacional de las Naciones Unidas entrega un criterio general “la prescripción de las acciones civiles no deberían ser excesivamente restrictivas”. Sin duda alguna, el homicidio de prisioneros de guerra, de civiles detenidos, la desaparición de personas (secuestro) constituyen violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario y se les califica y considera como delitos de lesa humanidad. La presente demanda civil de reparación de las víctimas se encuentra plenamente en la situación precedentemente descrita.

Por su parte, también la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 63.1, que:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la



vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Si el delito y la pena son imprescriptibles, también lo son las obligaciones reparatorias que emanan de dichos delitos, tanto para el Estado, cuya responsabilidad internacional está comprometida, pues agentes del Estado son los violadores de derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad e integridad física y psíquica de las personas, como para terceros que acarrean responsabilidad en los hechos, cuyo es el caso de la empresa Endesa codemandada en esta causa.

Respecto al derecho de las víctimas a ser reparadas in integrum, hace una referencia al concepto de víctima y reparación contenidas en la Resolución de las Naciones Unidas sobre Principios y Directrices Básicas y que se relacionan directamente con el derecho a reparar y con la norma citada del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, complementando lo expuesto con lo señalado por el Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, en cuanto ha desarrollado e integrado a la jurisprudencia y doctrina en materia de derechos humanos el principio de la Justicia restaurativa, que *“...origina una obligación restaurativa, de connotaciones amplias, que implica un proceso y no una mera actuación, en la que participan tanto víctimas como ofensores, atendiendo integralmente sus efectos o consecuencias, sean éstas directas, indirectas e incluso las repercusiones mediatas. La justicia restaurativa se distingue de la retributiva y rehabilitadora, por cuanto, sin desatender el castigo y la reintegración social del ofensor, su eje central está planteado en reparar el daño de manera integral, de forma tal que, entendiéndola como un proceso, tiende a buscar multiplicidad de objetos, constituyendo la restauración tanto los resultados reparatorios, que incluyen, en la mayor medida posible, la restitución, compensación, reparación, reconciliación, aceptación, hasta llegar a asumir el hecho con todas sus consecuencias, puesto que incluye a todos los que integran el problema: la víctima, el autor, sus familias, otras personas afectadas, la comunidad y, en fin, el Estado mismo”*

Respecto al Derecho aplicable, indica que la obligación del Fisco de Chile de reparar los perjuicios ocasionados por el delito de secuestro calificado y/o de detenidos desaparecidos, se funda tanto en los tratados internacionales como en las normas de derecho público interno.

Señala que desde el punto de vista de derecho público nacional, ella descansa en el inciso 3° del artículo 1°; en el inciso 2° del artículo 5° y en el artículo 6° de la



Constitución Política de la República, complementado por el artículo 38 inciso 2° de la citada carta magna, y respecto a este último, expone que el hecho que la norma constitucional separe el hecho, de la lesión del agente culposo, de acuerdo a la frase final del precepto “sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño ”, nos pone frente a lo que la doctrina denomina la responsabilidad objetiva del Estado, fundada ella en una norma de derecho público, distinta de la civil.

Para que opere esta responsabilidad objetiva de la Administración basta que concurra de manera copulativa tres elementos, a saber:

Lesión de un derecho.

Lesión causada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Relación causal entre los mismos.

Advierte que en el presente caso resulta inoficioso abundar sobre el tema de la “falta de servicio” puesto que hay una sentencia judicial de carácter penal que determinó la responsabilidad de funcionarios activos (a la época), de oficiales de Ejército de Chile, en los delitos de secuestros calificado de que fueron víctimas los actores.

Prosigue señalando que la segunda fuente normativa es el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, ambos aplicables al año 1973. Afirma que no habría duda que el secuestro calificado de que fue víctima el hermano de los actores, en el contexto jurídico de un país en Estado de Sitio, sometido a la jurisdicción de los tribunales militares en tiempo de guerra, constituye un delito de lesa humanidad. Cita al efecto, el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Refiere también el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un deber general de reparación a favor del lesionado en el goce de un derecho o libertad conculcado. Mandata expresamente a la Corte Interamericana cuando ella constate que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, a ordenar reparar las consecuencias de la vulneración de esos derechos y al pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Expone que este deber no se encuentra restringido solo al órgano jurisdiccional internacional, sino que constituye un mandato normativo (de carácter internacional pero internalizado en nuestro derecho interno con la ratificación por Chile de esta Convención) que compromete al Estado a adoptar medidas legislativas u otras de adecuación del derecho interno en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señala que en la sentencia de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana en contra de Chile en el caso de Juan Almonacid, se estableció el deber de control de



convencionalidad que pesa sobre los tribunales nacionales que los obliga a aplicar directamente la Convención Americana.

En cuanto a la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), hoy privatizada, a la fecha de ocurrir los hechos ilícitos y dañosos era una empresa del Estado de Chile, perteneciente a la Corporación de Fomento de la Producción, por lo que su parte estima que, en lo sustancial, son aplicables las normas precedentemente antedichas, con el agregado que al ser la víctima un trabajador de Endesa, sus relaciones estaban directamente reguladas por un contrato laboral y por el Código del Trabajo vigente a la época, todos los cuales les fueron conculcados con graves perjuicios a sus familias.

Respecto a los daños, señalan que la desaparición de su hermano, les causo un daño directo y múltiple, el que no se agota con la pérdida del hermano mayor, puesto que la familia entera se vio aislada en una localidad lejana, rural y cordillerana, sin redes de apoyo, el temor de que otros dos hijos, menores de edad, fueran nuevamente detenidos y hechos desaparecer. Presenciaron a sus hermanos Celso y Juan Carlos volver el 18 de Septiembre al hogar, golpeados, en sus cuerpos, en sus rostros y en sus almas. Añaden que todas las gestiones echar por sus padres para saber de su hijo se topaban con indiferencia y negación. Su situación de pobreza los puso frente a militares, carabineros, autoridades de Endesa, como una fuente de temor y de peligro.

Agregan que tuvieron que abandonar su localidad e instalarse en Talca, donde tenían menos visibilidad, trabajaron en ferias libres, vendiendo verdura en la calle para poder comer.

Exponen que en esta demanda buscan hacer visible el dolor de no entender la desaparición de su hermano, sin nunca haber hecho nada, lo que les provocó sufrimiento y les cambió la vida, la pérdida de la inocencia y la confianza en la autoridad; también el sufrimiento de sus padres transmitido día y a día.

Señalan que la reparación es otra cara de la Justicia, sólo en ella tiene sentido y fundamento. La restitutio in integrum, aunque las cosas no puedan volver íntegramente atrás, al menos es un concepto jurídico vivo, recibido como legado de generación en generación y que permite hacer un ejercicio de simulación, de quitar virtualmente la existencia de ese mal provocado. Por todo lo expuesto, solicitan por concepto de reparación lo siguiente:

1. □ Por concepto de justa indemnización moral, el reconocimiento público de que José Abel Coronado Astudillo fue víctima de un delito de lesa humanidad, restituyéndose en plenitud su honra y dignidad. Para este efecto solicitan se



condene al Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, a publicar en un diario de circulación nacional, en que se haga público lo sustancial de lo fallado en los autos criminales en que se condenó a los oficiales del Regimiento de Los Ángeles como autores del delito de secuestro calificado en contra de sus familiares, con expresa mención de que las víctimas fueron todos trabajadores de Endesa.

2.□ Por concepto de justa indemnización moral, se condene a la Empresa Nacional de Electricidad S.A a publicar en un diario de circulación nacional un listado de los trabajadores de dicha empresa que fueron asesinados o fueron víctimas de represión y desaparición forzada después del Golpe de Estado, y el solemne compromiso de la empresa de respetar y hacer respetar los derechos humanos de sus trabajadores.

3.□ Por concepto de justa indemnización dineraria del daño moral de los lesionados por el delito, se condene al Fisco de Chile al pago de la suma de 5.000 Unidades de Fomento para cada uno de los demandantes, la que deberá ser pagada en su equivalente en moneda nacional a la fecha del pago efectivo, con intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, o la suma que se determine.

4.□ Por concepto de justa indemnización a la parte lesionada demandan que la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa, a fin de que ésta sea condenada al pago de la suma de 2.500 Unidades de Fomento, a cada uno de los demandantes en su equivalente en moneda nacional a la fecha del pago efectivo, con intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, o la suma que se determine, por concepto de indemnización dineraria del perjuicio moral.

Previas citas legales, solicita en definitiva, acoger la demanda deducida, condenado a cada demandado a las indemnizaciones señaladas en el párrafo precedente, todo con expresa condena en costas.

QUINTO. Que, en su contestación, la demandada Fisco de Chile señala que la actora interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando sea condenado a lo condene a pagar la suma de 5.000 U.F. (cinco mil unidades de fomento) a cada uno de ellos, en su equivalente en moneda nacional, a la fecha del pago efectivo, con intereses desde la fecha de notificación de la demanda, con costas o la suma que se estime, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral sufrido por el delito de secuestro y desaparición de su hermano, don José Abel Coronado Astudillo, hecho que indican como ocurrido el día 17 de septiembre 1973, invocando como fundamento los artículos 1º inciso 3º, 5 inciso 2º, 6, 38 inciso 2º de la Constitución Política de la



República de 1980; y en general del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, todo lo cual configuraría una responsabilidad extracontractual objetiva e imprescriptible del Estado.

Respecto de las excepciones, defensas y alegaciones, opone en primer lugar la improcedencia de la indemnización, por haber sido preterido legalmente el demandante, en su calidad de hermanos de la víctima.

Explica que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales –que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Así, no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Expone que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

El impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto, conforme se consignó en el punto anterior. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello



compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, preteriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Afirma que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Refiere que en el Derecho Comparado, en el Common Law, se alude al concepto de “loss of consortium”; esto es, el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. En el Derecho estadounidense se alude al concepto de “loss of society”, que se refiere a la noción de control, poder marital. Por su parte, en Inglaterra, se menciona el “dependant law”, en donde ocupan el primer y excluyente lugar el o la cónyuge y los hijos. También en Sudamérica, específicamente en Argentina, esta materia se encuentra resuelta en el artículo 1098 del Código Civil, según el cual, esta acción de satisfacción está limitada a los herederos forzosos.

Indica que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Advierte que el respecto, es claro que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fue preterido por la ley como beneficiario de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía, como se explicará más adelante. En suma, concluye que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que



se excluyó a los hermanos de los causantes detenidos desaparecidos, como beneficiarios de las leyes de reparación.

En segundo lugar, opone la excepción de reparación satisfactiva. Señalando que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los actores que comparecen en calidad de hermanos de la víctima, sin perjuicio que no hayan tenido derecho a un pago en dinero –por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido.

Explica que, tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido

Refiere que, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, como se expresara en el capítulo anterior. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Al respecto, señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban una “Pensión Única de Reparación Para los Familiares Directos de las Víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de Ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivó en la Ley 19.123 que creo la Corporación Nacional



de Reparación y Reconciliación, diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

El Ejecutivo, -siguiendo el referido Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". De esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación "moral" buscada por el proyecto.

Explica que en ese orden de ideas, puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias – sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Advierte que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Así Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, "pues aquí resulta de partida absurdo compensar; esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) "Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida" y b) "Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo".

Detalla, que en el caso de las personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, señaladas en detalle previamente en la presente contestación, a saber:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;



b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Agrega además, que los actores de autos pueden ser titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

En este sentido, refiere que diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor



congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto, que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos. Así, en el caso Almonacid, se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares (cónyuge) y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior - prosigue la sentencia - el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial...”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, consid. 161).

Refiere que, de ser efectivo que los demandantes pudieron no percibir una reparación expresada mediante pagos en dinero, en tal caso, como extensamente se ha expuesto y también lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el dicho fallo del caso “Almonacid”, las políticas de reparación asumidas por el Estado por violación a los derechos humanos, entre las cuales están las reparaciones simbólicas ya referidas, los programas de beneficios educacionales y el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), significan también reparación a los familiares de víctimas de derechos humanos.

Estando entonces las acciones de autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que se deduce la excepción de reparación satisfactiva a las acciones deducidas por los demandantes que comparecen en calidad de hermanos de la víctima, por haber sido ya indemnizados mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha señalado precedentemente.



A continuación, opone la Excepción de Prescripción Extintiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, como asimismo, de los artículos 43 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 2.503 N°2 del Código Civil, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que según lo expuesto en la demanda, la detención y desaparición de la víctima se produjo el día 17 de septiembre de 1973.

Explica que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 30 de enero de 2018, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Hace referencia a generalidades sobre la prescripción, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.



Efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso primero del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Señala que fundamento de la prescripción, es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones -que al igual que en la usucapión cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción. De esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores nos permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente



pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones, consigna que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Añade, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

A continuación y haciendo referencia a la jurisprudencia sobre la materia, cita la sentencia del pleno de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013 (Rol 10.665-2011) y señala que como es de público conocimiento, la Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, dictó con fecha 21 de enero de 2013 sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare



imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

5°) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

Añade que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo, no hacen más que reiterar la misma doctrina, reconociendo el carácter de prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos al de autos.

Cita al efecto la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 15 de mayo de 2012 en la causa “Domic Bezic y otros con Fisco de Chile” y agrega que hay jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa, solicitando que se tenga en especial consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excelentísimo Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción, en materias como la de autos.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, indica que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Menciona que sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en



materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Indica que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente y respecto a normas contenidas en el Derecho Internacional en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que su parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Explica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los “Convenios de Ginebra de 1949”, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.



Advierte que la recomendación de la comunidad internacional es clara en distinguir entre acciones penales y las acciones civiles que nacen de los mismos hechos; así como en disponer que, mientras las primeras jamás deben prescribir, las segundas, en cambio, si pueden hacerlo, a menos que exista un tratado que así lo contemple expresamente, lo que no acontece

La Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la que advierte, que la aplicación de dicho tratado no es atinente al caso sub-lite, puesto que en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Añade que en relación a esta Convención debe, destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Insiste que el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4067-2006, en



fallo de fecha 29 de octubre de 2007, pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sres. Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, el fiscal subrogante Sr. Carlos Meneses y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro y Oscar Herrera.

Añade que en el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excm. Corte Suprema.

Concluye que, no habiendo, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Concluye, que con el mérito de lo expuesto precedentemente el Tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En cuanto al daño e indemnización reclamada y en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos. Señala que los demandantes ejercen su acción indemnizatoria por daño moral y solicitan, por este concepto la suma de 5.000 UF para cada uno de ellos, más intereses y costas, en la forma señalada por la demanda.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante



una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Expone que la Excma. Corte Suprema, ha dicho: "Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcularla suma necesaria para borrarlo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido".

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Insiste, que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

A mayor abundamiento, cita sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad, dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891–2013.

En subsidio de las excepciones opuestas de pago y prescripción, señala que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todos los pagos en dinero que se han efectuado a los familiares del actor por parte de Estado, conforme a las leyes de reparación (N° 19.123 y N° 19.980) y también todos los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales y otros contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Afirma que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del



derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Además de lo alegado, añade que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Expone que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que devengue intereses.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostiene que respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, y agrega que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora

SEXTO. Que, en su contestación, el demandado Enel Generación Chile S.A. solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas, en consideración de los argumentos de hecho y derecho que expone a continuación: En primer lugar, hace una resumida exposición de los demandantes y de su acción dirigida contra el Fisco de Chile y en contra de Endesa.

Prosigue indicando que, dado que se entablan en autos dos acciones completamente independientes entre sí, resulta indispensable fijar y separar las acusaciones levantadas por la parte demandante en contra de Endesa, distinguiéndolas claramente de aquellas dirigidas en contra del Fisco, señalando respecto a la demanda, en lo pertinente a su parte, que Endesa, en su supuesta calidad de empleadora de don José Abel Coronado Astudillo, habría ostentado una posición de garante respecto del mismo, por lo que le sería reprochable que la



detención hubiese tenido lugar en su domicilio, ubicado en una población destinada a obreros de las centrales, lo que daría cuenta de una supuesta vulneración de sus derechos como trabajador.

Refiere asimismo, que los demandantes señala que habrían sido ejecutivos de Endesa los que denunciaron a su hermano a las autoridades de la época, y que dichos ejecutivos habrían facilitado la camioneta en que se habría llevado a cabo la detención. En ese sentido, la contraria acusa que habría existido cierta complicidad de parte de su representada, pues dependientes de Endesa habrían permitido o colaborado haciendo posible que la detención tuviera lugar.

Añade que los actores estiman que las circunstancias referidas bastan para afirmar que existió una supuesta cooperación ilícita de parte de su representada en la detención de su hermano, suficiente para fundar la responsabilidad de Endesa por el daño moral que les habría significado la privación de su pariente.

Así, los demandantes deducen un acción civil indemnizatoria por la responsabilidad que atribuyen a Endesa, acción que emanaría de normas de derecho público, de carácter nacional (Constitución, derecho penal y derecho procesal penal) y de derecho internacional (Resolución 60/147 de la Asamblea de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Penal Internacional y Convención Americana de los Derechos Humanos), ya que al tiempo de los hechos habría ostentado la calidad de empresa estatal. Al mismo tiempo esta acción se fundaría en el Código del Trabajo, por haberse supuestamente conculcado los derechos del trabajador por parte de Endesa.

En consecuencia, concluye, los ocho demandantes piden condenar a Endesa al pago de 2.500 Unidades de Fomento para cada uno (es decir, 20.000 UF), más intereses a contar desde la notificación de la demanda; y a realizar una publicación en un diario de circulación nacional, todo por concepto de indemnización por daño moral.

Prosigue haciendo un resumen de las alegaciones que interpondrá y que justifican el total rechazo de la demanda, desarrollando luego cada una de ellas, según el siguiente detalle:

Alega en primer lugar, que la acción deducida en autos contra Endesa, se encuentra irremediablemente prescrita.

Expone, que la detención de don José Abel Coronado Astudillo por parte de agentes del Estado, fundamento fáctico de la acción dirigida en contra de Endesa, aconteció el 17 de septiembre de 1973, es decir, hace casi 45 años.

Así, la acción deducida en contra de su representada se encuentra largamente prescrita, ya que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, las



acciones en materia de responsabilidad extracontractual prescriben transcurridos 4 años desde la perpetración del acto.

Señala que la parte demandante busca eludir los plazos de prescripción dispuestos por el legislador, pretendiendo la aplicación respecto de Endesa de tratados y normativas internacionales que determinarían la imprescriptibilidad de la acción deducida.

Sin embargo, indica que (i) dicha normativa no resulta aplicable a este caso, (ii) tampoco es aplicable a su representada y, más aún, (iii) las normas citadas por la parte demandante no consagran la imprescriptibilidad de las acciones civiles emanadas de la comisión de delitos de lesa humanidad.

En primer lugar, expone que no concurre en la especie el presupuesto de la pretendida imprescriptibilidad, esto es, una condena que vincule a su representada con Delitos de Lesa Humanidad, rigiéndose la prescripción por las normas del Derecho común.

Refiere que la parte demandante sostiene lo siguiente: (i) “que de todo delito nace una acción penal para perseguir a los responsables y una acción civil tendiente a reparar los daños provocados por el ilícito”; (ii) que la “acción civil indemnizatoria, reparatoria” dirigida en contra de Endesa es imprescriptible atendido el hecho que le da origen, esto es, la pretendida participación de dicha empresa con la detención de José Abel Coronado Astudillo, que importaría una participación en delitos de lesa humanidad.

Entonces, la única razón por la que podría entrarse siquiera a discutir la imprescriptibilidad de la acción que invocan los demandantes, sería el entender que dicha acción emana de daños sufridos por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos por parte de Endesa, o sujetos vinculados a esta empresa. Sin perjuicio, indica que Endesa no ha tomado parte, y ningún ejecutivo de dicha empresa ha sido investigado, procesado, acusado o condenado por la comisión de tales crímenes. No hay sentencia penal que califique los hechos imputados por la demandante a Endesa como una participación de en delitos de lesa humanidad, no correspondiendo a este tribunal hacer dicha calificación.

Así, señala que sólo cabe entender que la supuesta responsabilidad de Endesa habrá de regirse según las normas del derecho común, esto es, el régimen de responsabilidad extracontractual, contenida en el Código Civil, en virtud del cual la acción dirigida en contra de Endesa, de contenido derechamente patrimonial, se encontraría largamente prescrita, puesto que las acciones en materia extracontractual prescriben transcurridos cuatro años desde la perpetración del acto, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.



Señala, que enderezar una demanda casi 45 años después de la supuesta perpetración de los actos que se reclaman contraría flagrantemente el principio de seguridad jurídica. Más aún, se afecta el derecho a defensa de Endesa, ya que luego de tanto tiempo su representada no está en posición de recabar antecedentes sobre estos hechos, o encontrar testigos.

Incluso, agrega, si se estimara que tener certeza sobre lo sucedido a don José Abel Coronado Astudillo era necesario para entablar esta demanda, se ha fallado por la Corte Suprema que la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y reconciliación constituye el momento en que los titulares de acciones civiles de reparación contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer sus pretensiones ante los Tribunales de Justicia.

Aun siguiendo dicho criterio, y habiendo transcurrido más de 20 años desde la publicación de este Informe, se puede concluir que la presente acción está irremediabilmente prescrita.

En segundo lugar, expone que la normativa citada por la parte demandante para sostener la imprescriptibilidad no es aplicable respecto a su representada.

Sobre lo señalado en la demanda, en cuanto la normativa internacional en la que funda su prescriptibilidad sería aplicable a Endesa porque “a la fecha de ocurrir los hechos ilícitos y dañosos era una empresa del Estado de Chile, perteneciente a la Corporación de Fomento de la Producción, señala que Endesa es y fue creada como una persona jurídica de derecho privado. En efecto, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. fue creada en virtud de un acuerdo del Consejo de la CORFO de fecha 21 de julio de 1943, el cual dispuso su constitución como sociedad anónima, por lo tanto, una persona jurídica de derecho privado. Su constitución tuvo lugar el 1 de diciembre de 1943, y la primera sesión del Directorio de esta sociedad tuvo lugar el 14 de enero de 1944.

Así, asegura, Endesa nunca formó parte de la Administración del Estado. La única conexión que mantuvo con el Estado fue a través de la participación que tenía la CORFO en la propiedad de la sociedad. De esta forma, Endesa no se encuentra comprendida dentro de las entidades enumeradas en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional que sienta las Bases de la Administración del Estado, sino dentro de las señaladas en su artículo 6°: “El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales. Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.”

Por lo tanto, desde su constitución, señala que Endesa se encuentra sujeta a las normas del derecho común, también en lo concerniente al régimen de



responsabilidad que le resulta aplicable. Entonces, no es efectivo que le sean aplicables las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado, como pretende la contraria.

Añade que tampoco resulta relevante para estos efectos que el Reglamento de Higiene y Seguridad de Enel Generación Chile, dentro de políticas aprobadas con fecha 26 de septiembre de 2013, aluda a una serie de tratados internacionales sobre los que basa e inspira su compromiso de respeto a los Derechos Humanos, indicándolos como “Referencias Internacionales”. Sostener que por dicha referencia serían aplicables y exigibles a su representada todos los instrumentos ahí enumerados, cual si fuera el mismísimo Estado Parte que los suscribió y sin distinción ni matiz alguno, escapa claramente el objetivo y alcance de dicho documento.

Por todo lo anterior, insiste en la conclusión que la responsabilidad de Endesa se rige por las normas de derecho común, en el marco de la cual la acción deducida en autos se encuentra largamente prescrita.

En tercer lugar, indica que sin perjuicio de lo ya señalado, la normativa citada por la contraria no consagra la imprescriptibilidad de la acción civil emanada de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Advierte que para el caso en que se entendiese que ésta se basa en la participación en delitos de lesa humanidad, a pesar de que ello no haya sido jamás constatado por tribunal alguno respecto de Endesa, ningún tratado internacional consagra la imprescriptibilidad de la acción civil dirigida a obtener la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Asegura que ni los tratados vigentes a la época de los hechos, ni aquellos que han entrado en vigencia con posterioridad, han revestido a la acción civil que emana de los daños ocasionados en la comisión de delitos de lesa humanidad de imprescriptibilidad, lo cual sería sumamente importante, desde que la prescripción es un principio general del Derecho, tanto interno como Internacional, siendo la imprescriptibilidad una excepción sensibilísima, que por lo mismo debe ser consagrada expresamente e interpretada restrictivamente.

Añade que bastaría examinar los principales tratados atinentes a la materia para comprobar que no existe norma alguna que consagre una supuesta imprescriptibilidad de la acción civil:

a) Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968 (vigente en Chile desde 1970), sólo declara imprescriptibles la acción penal para perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad.



b) Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, de 1949, (vigente en Chile desde 1951), se refiere únicamente a las acciones penales dirigidas a perseguir la responsabilidad de los autores de delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

c) Ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni el Estatuto de Roma consagran la imprescriptibilidad de la acción conducente a indemnizar perjuicios. Es por ello que quienes sostienen que no cabe aplicar la prescripción de la acción civil emanada de la responsabilidad extracontractual, tal como está contemplada en nuestro derecho interno, fallaría al indicar la normativa que sí sería aplicable.

Sobre el tema, señala como importante aclarar que la Resolución 60/147 emitida por la Asamblea de las Naciones Unidas el año 2005, no es de naturaleza vinculante, y solo enuncia “Principios y Directrices Básicos”, recomendando a los Estados Parte tenerlos en consideración, además, dicha Resolución indica que cualquier imprescriptibilidad de acciones emanadas de crímenes de lesa humanidad depende de la consagración previa de un tratado propiamente tal. En cuanto a la prescripción de la acción civil, se señala expresamente que las disposiciones nacionales que rigen la misma “no deberían ser excesivamente restrictivas”.

Es decir, la Resolución 60/147 reconoce que la acción civil sigue la regla general, que es la prescriptibilidad, y que se rige según las disposiciones del derecho interno: *IV. Prescripción 6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional. 7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.*

Expone que atendido que la prescripción es un principio general del Derecho, que tiene como fundamentos últimos la paz social y la certidumbre en las relaciones sociales, en cuanto busca que los conflictos no se extiendan eternamente, fijando un término dentro del cual entregar la resolución de los mismos a la Justicia, no se puede obviar su aplicación ligeramente. Claramente, declarar un derecho como imprescriptible es algo que escapa las facultades de los Tribunales de Justicia, y que debe ser dispuesto por el legislador, una vez ponderadas cuidadosamente las razones que lo justificarían.

Cita al efecto a la Excelentísima Corte Suprema, que conociendo en pleno un caso en el que se pedía la indemnización de daños derivados de delitos de lesa humanidad bajo distintos tratados internacionales, resolvió:



“ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional”

En definitiva, concluye que la demanda de autos pretende una falsa aplicación de los tratados internacionales invocados, requiriendo que se dé lugar a una doctrina que no es legislación, ni se fundamenta seriamente en los instrumentos jurídicos que tratan la materia, dejando de aplicar las normas efectivamente pertinentes al caso. Es decir, el Derecho Común.

A continuación, alega la Falta de Legitimidad Activa de los demandantes, para alegar la supuesta vulneración de derechos laborales de don José Abel Coronado. Explica, que la legitimación se encuentra vinculada con la titularidad del que ha tenido una participación en la situación controvertida, por lo que se trata de un presupuesto de fondo de la procedencia de la acción. Consecuentemente, la falta de esta exigencia determina la improcedencia de la petición de tutela judicial solicitada mediante el proceso.

Advierte, teniendo en consideración que los demandantes demandan a título personal, llama la atención que hagan continuas referencias en su demanda a una supuesta conculcación de los derechos laborales de su hermano por parte de Endesa:

- *“La responsabilidad de Endesa tampoco se compromete por normas de derecho común, aunque como empleadora esté obligada por la responsabilidad contractual de las normas del Código del Trabajo respecto de la seguridad de sus trabajadores”.*

- *“(…) obligación de reparar la vulneración de derechos de trabajadores suyos, en los que incurrieron los ejecutivos de la empresa en el pasado, tales como la que afectó a nuestro hermano José Abel Coronado Astudillo, detenido al interior de las instalaciones de la empresa, con la colaboración activa y/o pasiva de sus jefaturas”.*

- *“En cuanto a la demandada Empresa Nacional de Energía S.A. (...) estimamos que en lo sustancial, son aplicables las normas precedentemente antedichas, con el agregado que al ser víctima un trabajador de Endesa, sus relaciones estaban directamente reguladas por un contrato laboral y por el Código del Trabajo vigente*



a la época, todos los cuales fueron conculcados con graves perjuicios a sus familias”.

Señala que si bien, a su representada no le consta la relación laboral sostenida por los demandantes, hace presente que los actores carecen de legitimación activa para alegar la supuesta vulneración de derechos laborales de don José Abel Coronado. En efecto, dicha alegación sólo puede impetrarla el trabajador o sus herederos actuando a título del causante, pero jamás terceros extraños a la relación laboral.

Por ello, la acción deducida en contra de Endesa habrá de ser desestimada por cuanto se funda en incumplimientos de índole laboral respecto de los cuales los demandantes no tienen titularidad.

A continuación, alega la falta de legitimidad pasiva de Endesa, indicando que, conforme a la doctrina, para que una acción prospere, ésta debe dirigirse contra determinada persona que ostente la calidad o condición que dicha acción tenga como supuesto.

Advierte que este requisito no concurre respecto de su representada por dos motivos. En primer lugar, porque Endesa es una persona jurídica de derecho privado, mientras que la acción deducida contempla la obligación de reparación respecto de Estados Parte de los tratados que invoca, calidad que ciertamente la demandada no ostenta.

En segundo lugar, se dirige en contra de su representada una acción de reparación que supone que Endesa ha sido condenada por la comisión o participación en delitos de lesa humanidad. Más aún, la acción deducida se refiere a casos en que la Corte Penal Internacional (artículo 75 del Estatuto de Roma) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos) hayan realizado dicha calificación. La calidad de condenado por alguna de estas sedes, claramente no concurre respecto de Endesa, y tampoco lo ha afirmado así la contraria.

Agrega que Endesa tampoco ha sido condenada en relación a la desaparición forzada de don José Abel Coronado Astudillo por tribunales nacionales. En efecto, las sentencias señaladas por la actora sólo atribuyen participación en este delito a oficiales del Ejército, y sólo ellos son sindicados como autores de un delito de lesa humanidad.

De esta forma, asegura que su representada no ostenta la condición o calidad que requiere la normativa en que se fundamenta la acción reparatoria deducida en su contra. Por lo tanto, falta la legitimación pasiva y la acción habrá de ser rechazada en su totalidad.



A continuación, solicita el rechazo de la demanda por improcedencia e inaplicabilidad de las normas en que se funda respecto de Endesa.

Expone que la contraparte se remite, para sustentar jurídicamente sus pretensiones, a normativa internacional referida a la comisión de delitos de lesa humanidad, como la Convención de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre dicha normativa fundamenta no sólo la imprescriptibilidad de la acción deducida en contra de Endesa, sino también los deberes de reparación que supuestamente cabrían a mi representada, su naturaleza y alcances.

Señala en primer lugar que Endesa, es y fue constituida como una persona jurídica de derecho privado y como tal jamás ha formado parte de la Administración del Estado, y su única vinculación con éste fue a través de las acciones que CORFO mantuvo en su inicio, en consecuencia, sería incorrecta la aseveración de la parte demandante en cuanto a que a Endesa serían igualmente aplicables las normas en que soporta su demanda en contra del Fisco, porque a la fecha de los hechos *“era una empresa del Estado de Chile, perteneciente a la Corporación de Fomento de la Producción”*. Empresa del Estado es aquella constituida por Ley. Endesa fue constituida como una sociedad anónima y se regula por normas de derecho privado.

Insiste, que la aplicación de las normas de derecho internacional citadas es derechamente improcedente por cuanto falta el supuesto lógico de las mismas, esto es, la existencia de una sentencia penal que vincule a Endesa con la comisión de delitos de lesa humanidad.

Sobre esto, realiza las siguientes observaciones:

i. Los tratados internacionales invocados por la parte demandante no estaban vigentes al tiempo de los hechos, esto es, septiembre de 1973.

La contraria invoca especialmente el Estatuto de Roma y el Pacto de San José de Costa Rica para fundamentar su demanda. Pero ninguno de dichos tratados había entrado en vigencia al tiempo de los hechos.

En efecto, el Estatuto de Roma fue publicado en el Diario Oficial el 06 de Julio de 2009.

En cuanto a la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, ella fue publicada el día 05 de Enero de 1991. Añade que al ratificarla, Chile formuló una reserva, en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo



caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Tampoco se encontraba vigente en Chile, el año 1973, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado el 30 de noviembre de 1976, por Decreto Supremo N° 778 del Ministerio de Relaciones Exteriores, según fue publicado el 29 de abril de 1989 en el Diario Oficial.

ii. Sin perjuicio de lo que ya ha señalado que los tratados internacionales no son aplicables al caso pues no estaban vigentes al tiempo de los hechos; advierte que las normas invocadas por la demandante están dirigidas expresamente a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la reparación que conciben sólo se aplicaría respecto de condenados por dichos tribunales.

El artículo 75 del Estatuto de Roma recoge el principio de reparación a las víctimas de los delitos que trata – entre ellos los crímenes de lesa humanidad – de parte de sus victimarios, y el artículo 63 N° 1 del Pacto de San José de Costa Rica ordena condenar a los Estados Parte a la indemnización de perjuicios y reparación de las consecuencias cuando se haya comprobado la vulneración de derechos humanos.

De lo anterior, indica en primer lugar, que no siendo Endesa ni autor o partícipe de delitos de lesa humanidad, ni Estado Parte en los términos de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ninguno de los citados artículos le es siquiera remotamente aplicable.

Ambos cuerpos normativos contemplan la reparación como una que sólo corresponde fijar (i) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un fallo dictado contra algún Estado Parte, o (ii) a la Corte Penal Internacional, dentro de un fallo dictado en contra de una persona natural encontrada culpable de los delitos que dicha Corte puede conocer.

En efecto, la disposición del artículo 63 N°1 del Pacto de San José de Costa Rica, no contiene un mandato dirigido a los Estados Parte, ni a sus tribunales, sino que, señalando las competencias y atribuciones que se entregan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispone que ella podría fijar la procedencia de reparaciones, opción que le es facultativa.

Por su parte, de conformidad al artículo 75 del Estatuto de Roma, tal cuerpo normativo sólo tiene por objeto otorgar a la Corte Penal Internacional las facultades que señala, a fin de permitirle sólo una vez que una persona sea condenada por dicha Corte como culpable de un crimen de su competencia, fijar una reparación para las víctimas

En cuanto a la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, citada por la parte demandante, ella corresponde a “Principios y directrices básicos” en



relación a la reparación procedente en relación a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario; principios que recomienda a los Estados tener en cuenta y promover. Es decir, no es vinculante respecto de los Estados, y menos respecto de otras personas naturales o jurídicas.

En el punto 15, sobre las reparaciones, el referido documento indica:

“IX. Reparación de los daños sufridos

15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.”

En conclusión, acorde al citado documento (i) se recomendaría al Estado conceder reparación a las víctimas por aquellas conductas atribuibles al mismo, como ocurre en el caso de autos y (ii) para que procediera una reparación de parte de una persona o entidad ajena al Estado, se exige que se haya determinado la responsabilidad de la misma en las violaciones sufridas por las víctimas.

Concluye, que en conformidad a estos principios y directrices, nada corresponde a Endesa pagar a título de reparación, pues claramente no le resulta vinculante una recomendación realizada a “los Estados Partes”. Además, para que procediera dicha reparación se exige el haberse comprobado una responsabilidad en los hechos que fundan dicha reparación, lo que no corresponde en este caso.

A continuación, indica que sin perjuicio de lo ya expuesto, a su parte no le constan los hechos en que los demandantes fundan sus pretensiones respecto de Endesa, por lo que deben tener por controvertidos, recayendo su prueba sobre la parte demandante.

Refiere que el menoscabo que supone a la defensa del demandado el paso del tiempo, es justamente una de las razones que explican la institución de la prescripción extintiva de acciones. En este caso, indica que resultaría en extremo injusto para la defensa de su representada el enfrentarse a serias acusaciones



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

cuyos hechos fundantes no puede constatar debido al tiempo transcurrido desde que su ocurrencia.

Asegura que los hechos en que la demandante funda su acción de indemnización de perjuicios, constituyen circunstancias que escapan de la posibilidad real de Endesa de comprobar o constatar, viéndose obligados a controvertir todos los hechos que sustentan la demanda de autos en relación a Endesa, y en especial, las acusaciones levantadas por los demandantes en relación a una supuesta “complicidad” o “cooperación” que habría adoptado, ya sea por acción u omisión, la compañía en relación a la detención de su hermano.

Añade que tal como lo reconoce la propia demanda, no hay sentencia alguna que haya determinado la responsabilidad ni de Endesa ni de alguno de sus ex empleados en las detenciones y posteriores desapariciones que se indican en la demanda.

Señala que tampoco la demanda ofrece mayores antecedentes respecto de la pretendida participación de su representada, lo que dificulta incluso más el poder recabar cualquier información respecto de estos hechos.

En este sentido expone que las acusaciones vertidas (i) son absolutamente vagas en cuanto a la forma en que habría adoptado esta supuesta “complicidad”, o a las personas que se habrían visto involucradas; (ii) el proceso penal en donde se conoció de estos hechos únicamente determinó la responsabilidad penal de oficiales del Ejército; y (iii) contrario a lo que insinúa la parte demandante, no constan en el proceso penal antecedentes que permitan vincular a la Compañía con las detenciones (y en ningún caso fue objeto de investigación).

En consecuencia, reitera que estas afirmaciones deberán ser fehacientemente probadas por la contraparte y aún en el caso en que se comprobara que personas ligadas a la compañía participaron en estos hechos, lo cierto es que la contraria debería dirigir sus pretensiones en contra de esas personas, a título personal, y no contra Endesa, pues escaparía a la responsabilidad por los dependientes que establece la ley.

En efecto, conductas como las descritas por la demandante claramente no forman parte del riesgo vinculado a la actividad desarrollada la empresa, y exceden las facultades y atribuciones de cualquiera de sus personeros. Así, Endesa no sería responsable por las conductas desarrolladas por individuos ligados a la empresa fuera del ámbito de sus actividades regulares.

De esta forma, cualquier determinación de responsabilidad supondría la verificación de actos individuales completamente ajenos a la empresa, y a las labores que a sus empleados les son encomendadas, por tanto, se trataría de acciones realizadas a título personal.



Seguidamente, señala que la demanda debe rechazarse al no verificarse los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual.

Expone que todo estatuto de responsabilidad exige que se pueda imputar a una persona una conducta que causa daño. En coherencia con lo anterior, para afirmar la responsabilidad se debe imputar a la persona demandada una conducta antijurídica, un hecho suyo reprobado por el ordenamiento jurídico, señalando que a través de la misma se causó, dolosa o culposamente, un daño. Y, en caso de que el daño reclamado no pueda ser atribuido directamente a una conducta del demandado, falta un presupuesto elemental para el éxito de la acción entablada.

Hacer presente que las mismas sentencias penales acompañadas por la demandante, dentro de un proceso destinado a conocer en profundidad los hechos que rodearon las detenciones y posteriores desapariciones de las víctimas, no atribuyen a Endesa ningún tipo de participación en dichos delitos, ni dan cuenta de ningún antecedente que permita vincularla la perpetración de los mismos. Valga repetir que ni Endesa y ni siquiera ex personeros o empleados han sido objeto de condena alguna, por lo que no puede imputarse a su representada una conducta antijurídica que pudiera comprometer su responsabilidad por los daños reclamados.

En cuanto la Conducta y Antijuridicidad, refiere, según los demandantes, que la responsabilidad de su representada resultaría de acciones y omisiones que darían cuenta de la colaboración de Endesa en la detención de don José Abel Coronado Astudillo, a través de “la participación, activa y/o pasiva de sus dependientes que permitieron y/o colaboraron en la detención del trabajador”.

Así, la parte demandante afirma que a Endesa le cabría algún grado de participación en la detención forzada de su hermano por cuanto dependientes de dicha empresa habrían “actuado en concomitancia con otros civiles y en una activa colaboración con los agentes represivos en la zona, principalmente militares y carabineros”, de modo que no cabría “la menor duda de que hubo complicidad de quienes dirigían ENDESA.”

Agregan a lo anterior los demandantes, la consideración de que Endesa habría ostentado una posición de garante respecto de don José Abel Coronado Astudillo, por lo que le sería reprochable que la detención hubiese tenido lugar en su domicilio, ubicado en una población destinada a obreros de las centrales, lo que daría cuenta de una supuesta vulneración de sus derechos como trabajador, y que habrían sido ejecutivos de Endesa los que denunciaron a su hermano a las



autoridades de la época, y que incluso habrían facilitado la camioneta en que se habría llevado a cabo la detención.

Advierte que no profundiza mayormente la demandante en ninguna de estas acusaciones, ni señala los nombres de las personas involucradas. Por lo tanto, es forzoso concluir que ninguna de las circunstancias referidas es suficiente para constituir una conducta ilícita susceptible de comprometer la responsabilidad de Endesa

Añade que conforme el propio contexto indicado por los demandantes respecto al golpe de Estado, resulta plausible que haya sido la misma autoridad la que haya incautado los medios y la información que según la demandante, se habría obtenido de Endesa, sin intervención real de esta empresa, caso en que ni siquiera existiría una conducta de esta última.

Señala que la demandante sí reconoce, sin embargo, que Endesa habría sido intervenida por oficiales del Ejército, por lo que resulta en extremo difícil pretender relacionar a su representada con la detención misma sólo a partir de la supuesta propiedad que habría ostentado sobre la camioneta en la que supuestamente habrían llevado detenido a don José Abel Coronado Astudillo; agrega que ni de las sentencias acompañadas, ni el Informe Rettig dan cuenta de participación de Endesa o terceros distintos de las fuerzas de orden.

Hace presente también, que la “declaración jurada suscrita ante notario” por la madre de la víctima, doña María Celinda Astudillo González, según se consigna en la demanda, dista importantemente de las acusaciones presentadas en contra de Endesa por los demandantes, puesto que ella atribuyó la detención de su hijo a funcionarios de carabineros, y jamás aludió a una eventual participación de Endesa en la misma.

Insiste que incluso en el caso hipotético de que se comprobara la efectividad de las acusaciones formuladas por la parte demandante, no se puede pretender hacer responsable a Endesa por las conductas que sus personeros hayan ejecutado fuera del ámbito de las actividades de la empresa, y por cierto, fuera del ámbito del riesgo empresarial dentro del cual podría sostenerse que ella mantiene un deber de cuidado. De esta forma, las imputaciones de autos corresponderían a actos de personas naturales no atribuibles ni reprochables a Endesa.

Respecto a la relación causal, señala que si bien será carga de la parte demandante comprobar que de las conductas de Endesa se habría seguido el daño moral que reclama, incluso de tener por cierta la participación atribuida a su representada es posible cuestionar que exista una relación causal de las



características exigidas para configurar la responsabilidad extracontractual, es decir, normativamente relevante.

Explica que no basta la constatación de que un efecto se siguió en el plano natural de una causa determinada para justificar la responsabilidad, por cuanto igualmente se exige la concurrencia de ciertas consideraciones normativas. En otras palabras, la sola circunstancia que un hecho haya efectivamente intervenido en la serie de causas que producen un daño, no se sigue que pueda darse por establecida normativamente esa relación causal. Así, debe comprobarse que la causa fue necesaria y determinante para la verificación del daño, que debe ser a su vez consecuencia directa de la causa.

De esta forma, se deberá evaluar si la supuesta cooperación de Endesa reunió estas características, lo que en principio, y con los pocos datos que ofrece la demanda, es difícil sostener que la participación atribuida a su representada habría sido determinante para la producción del daño.

En cuanto al daño, señala que los demandantes afirman haber sufrido como consecuencia de la detención forzada de su hermano un daño moral que reclaman tanto respecto del Fisco de Chile como respecto de Endesa. Así, piden que se condene al primero en 5.000 UF, y a su representada en la suma de 2.500 UF por tal concepto, respecto de cada uno de los demandantes.

En primer lugar, señala que no se imputa a su parte el haber causado daños distintos de los que igualmente se reclaman respecto del Fisco de Chile. Ello es coherente con el relato ofrecido por la parte demandante, que adjudica a Endesa un rol de complicidad y cooperación con el delito cometidos por oficiales del Estado, hecho ilícito del cual se seguiría el daño moral consistente en la privación del hermano.

Sin perjuicio de que Endesa niega absolutamente haber desempeñado tal rol, es posible afirmar que en el caso hipotético en que se comprobara algún tipo de cooperación en el hecho ilícito, la demanda dirigida en su contra no podría prosperar en cuanto supondría una doble indemnización por el mismo daño.

Señala que el artículo 2317 del Código Civil dispone que “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328.”

Esta norma tiene por propósito hacer solidariamente responsables a todos los partícipes de un mismo hecho ilícito, por los daños derivadas del mismo. De no existir, sería imposible para la víctima comprobar la relación causal de los actos de cada uno de los partícipes con determinada parte del daño. Ello podría importar,



por otro lado, que se concediera una doble indemnización por un mismo daño, en una sede que tiene una clara vocación reparatoria (no sancionatoria).

Advierte, que por no estar debidamente interpuesta la demanda señalando al Fisco y a Endesa como solidariamente responsables de los daños, en forma coherente con el relato ofrecido; acceder a la indemnización reclamada separadamente tanto respecto del Fisco como de Endesa implicaría en los hechos posibilitar una doble indemnización. En consecuencia, la demanda no puede prosperar.

Respecto a los intereses alegados, señala que estos sólo pueden devengarse a partir de la dictación de una sentencia hipotética que acoja la demanda y establezca esa obligación, y, ciertamente, sólo desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Antes, malamente puede afirmarse que exista una obligación de indemnizar respecto de Endesa, por lo que no existe ninguna suma susceptible de devengar intereses.

A este respecto, cabe recordar que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. De este modo, en el evento improbable de que se decida acoger la acción de autos y condenar a su representada al pago de una indemnización de perjuicios, los reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la fecha en que dicha sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

Indica, por último, que la contraria habrá de demostrar la concurrencia de dolo o culpa en las conductas que atribuye a Endesa, porque claramente no procede aplicar un régimen de responsabilidad objetiva respecto de su representada.

Esto porque nuestro sistema de responsabilidad es el de responsabilidad por culpa. Así, la parte demandante debe atribuir no sólo una conducta a su representada, sino también una intención positiva de inferir daño o al menos negligencia en su proceder.

En este sentido, expone que cobra suma importancia el especial contexto en que habrían tenido lugar los hechos. Como ya señalara, la misma demandante indica que Endesa habría sido intervenida por agentes del Estado y que “las fuerzas armadas tomaron el control de esta empresa, exonerando a sus autoridades y nombrando a otras, pertenecientes a las Fuerzas Armadas en servicio activo y otras jubilados de las mismas”.

Así, de comprobarse que efectivamente Endesa habría facilitado medios o información para la detención de don José Abel Coronado Astudillo, tendrá que



evaluarse si ello correspondió a un acto libre y voluntario o uno forzado por la autoridad.

Refiere a continuación, que además de las indemnizaciones dinerarias por concepto de daño moral, la actora pretende que, por el mismo concepto, su representada sea condenada además a “publicar en un diario de circulación nacional un listado de los trabajadores de dicha empresa que fueron asesinados o fueron víctimas de represión y desaparición forzada después del Golpe de Estado, y el solemne compromiso de la empresa de respetar y hacer respetar los derechos humanos de sus trabajadores”

Alega que esta petición es derechamente improcedente. No hay norma alguna que le dé a la contraria el derecho a exigir de su parte la prestación que demanda, que supone una obligación de hacer. Esta petición no tiene fundamento normativo, y es por lo mismo, que no ofrece la parte demandante justificación a su pretensión, lo que en definitiva es equivalente a “pedir porque sí”.

Agrega, no se entiende que, tratándose la acción dirigida en contra de Endesa únicamente de la supuesta cooperación de su representada en la detención de don José Abel Coronado Astudillo, de pronto se incluya la obligación de realizar una publicación en nombre de otras tantas víctimas, por cierto, completamente indefinidas y extrañas a esta demanda, sin indicar cuál sería su relación con la demandada, o indicar por qué serían víctimas a su respecto y por qué recaería sobre Endesa la obligación de realizar una publicación a aludiéndolas.

Agrega que acceder a la petición de la contraria, tal como está planteada, puede llegar incluso a violentar los derechos de privacidad de terceros a esta causa, en temas sin duda sensibles.

Solicita en definitiva, tener por contestada la demanda y en su mérito rechazar la demanda deducida en contra de Enel Generación Chile S.A. en todas sus partes, con costas.

SÉPTIMO. Que, evacuando la réplica, los demandantes señalan respecto de la contestación del Fisco de Chile, da por reiterado lo expuesto en la demanda y respecto a las excepciones o defensas opuestas por el Consejo de Defensa del Estado, señala en primer lugar que la alegación de preterición de los demandantes, se contrapone con las normas de derecho internacional aplicables en la especie, que hacen procedente indemnizar a la familia de la víctima, incluidos hermanos en cuanto todos ellos son víctimas y han sufrido perjuicios directos y personales por la desaparición de su hermano. En ellos, recayó el dolor



y el sufrimiento de la búsqueda de su hermano, de llevar sobre sí el dolor de sus padres. Tienen título para accionar por sí y por su hermano.

Indica que el hecho de haber sido excluidos de las leyes de reparación no implica preterición legal para ejercer las acciones indemnizatorias que la ley les otorga en su calidad de víctimas, reiterando al respecto lo que se explicó en la demanda y la forma en que la detención y desaparición de su hermano influyó y determinó su vida futura, provocando el enorme sufrimiento que se expuso y acreditará en el curso de este juicio.

En segundo lugar, respecto a que los actores han obtenido reparación satisfactiva, la que hace consistir en las reparaciones simbólicas, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre, si bien son necesarias, pero ello no puede estimarse una reparación satisfactiva de la responsabilidad por el enorme daño causado.

Señala que el Estado Legislador no puede suplir ni menos sustituir al Estado Juez. Las leyes 19.123 y 19.992, que surgen de la convicción de veracidad de los informes de las comisiones presididas por don Raúl Rettig y Monseñor Valech, que constituyen un reconocimiento a la existencia de una práctica criminal y terrorista desarrollada por y durante la dictadura cívico militar, denunciada por la comunidad internacional, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las víctimas y organizaciones de derechos humanos, constituyen un paso significativo y valioso de las autoridades democráticas que recuperaron el ejercicio del poder político y no debe ser negado.

Expone que las medidas de mitigación del daño y dolor sufrido son valiosas, pero todo ello radica en una esfera distinta a la judicial. En la causa penal que da origen a la presente causa civil no fueron condenados los demandados, oficiales del Ejército de Chile, a causa del Informe Rettig, lo fueron por haberse comprobado su participación personal y como miembros del Ejército en la detención y desaparición de los deudos de los actores, después de un largo esfuerzo de investigación y digámoslo, también por la confesión del teniente Klugg.

Agrega que nada sustituye a la Justicia porque en ella además hay un valor sustancial al contrato social sobre la que se constituye toda sociedad civilizada como es la renuncia implícita a la autotutela, sin perjuicio de los derechos de los pueblos a rebelarse contra la tiranía. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, así lo confiesa la Constitución vigente y con un cinismo infinito incluso sus violadores.

Refiere que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad. Su objetivo es destruir el tejido social, ocultar el crimen, destruir la solidaridad, la



íntima dignidad de todo ser humano y negar a los deudos siquiera el consuelo de enterrar a sus muertos. Es un crimen contra la sociedad entera. En la presente demanda se ejerce el derecho que reconoce la ley cuando declara que de todo delito nace una acción penal para perseguirlo y una acción civil para reparar el daño sufrido.

Insiste, que la fuente de derecho que funda la presente demanda no tiene relación alguna con las leyes reparatorias invocadas por la contraria. Las fuentes de derecho invocadas nacen de la existencia de una sentencia de término penal condenatoria, ejecutoriada, en cuya virtud fueron condenados sólo algunos de los autores – de muchos otros partícipes que gozarán de impunidad en relación a este caso al menos- de los delitos de lesa humanidad que afectaron a los deudos de los actores. Sin esta condena no habría sido posible ejercer la acción civil de estos autos.

Asegura que no hay reparación satisfactiva en el caso de los actores y aún la insinuación de que pudiera haberla resulta en una nueva vulneración de su derecho a la reparación integral, en la forma que previene la normativa internacional y legal.

Respecto de la excepción de prescripción reitera lo expresado en el libelo, agregando que en la exposición del Fisco de Chile, en que se desarrolla esta excepción, reitera las argumentaciones que desarrolla en todas las causas de derechos humanos.

Señala en primer lugar, que no le corresponde al Consejo o a otra autoridad declarar la suspensión de la prescripción en hipótesis que la Ley no contempla.

En segundo lugar, explica que, sea cual fuese el delito, para pretender el derecho a indemnización por ser víctima de un delito penal, es requisito insoslayable demostrar con sentencia judicial en sede penal, de carácter condenatorio, que se haya declarado la existencia del delito y determinado la autoría del mismo. Sin este requisito no procede la acción civil respectiva. Si el Consejo de Defensa del Estado desarrolla la tesis de la denominada “justicia transicional” debiese de saber qué pasó con la justicia en Chile en tiempos de dictadura y en tiempos de transición respecto de estos delitos de lesa humanidad y que sólo a partir de la sentencia de la Corte Interamericana relativa al caso de Juan Almonacid, de 26 de septiembre de 2006, se logró relativamente uniformar los criterios jurisprudenciales sobre las dos causales de exoneración de responsabilidad (amnistía y prescripción) en relación a los desaparecidos y ejecutados políticos.

Afirma que una mínima coherencia jurídica del Consejo de Defensa del Estado, respecto de la aplicabilidad de las normas del Código Civil en materia de prescripción, tesis que su parte no comparte, sería estimar que ese plazo de



prescripción de 4 años que pretende el Fisco correría desde que se hace jurídicamente exigible impetrar la acción civil, esto es, desde el momento que hay sentencia penal de término, condenatoria, firme o ejecutoriada.

Expone, que como lo declara la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, es completamente improcedente aplicar las normas del Código Civil porque estamos frente a delitos de lesa humanidad regidos por el derecho público internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, cuya doctrina puede sintetizarse señalando que en esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

Insiste en que pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4 que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de la supremacía de su finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado.

Finalmente, se refiere a las alegaciones de que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos



establecidos por los Tribunales, la cual sería incomprensible, pues en la contestación de la demanda el Fisco señala que nada han recibido los actores en dinero, ya que han sido preteridos en las leyes indemnizatorias y piden nuevamente que nada se les otorgue.

Concluye reiterando la petición de que se otorgue a cada uno de los actores el monto que quedó pedido en la demanda, como indemnización por los gravísimos daños morales que les fueron causados a través de los hechos que se expusieron en la demanda, cuya extensión se prolonga hasta la fecha.

A continuación, evacua la réplica respecto de la contestación de la demandada Endesa, que opone en primer término la excepción de prescripción, sosteniendo que a su respecto falta el presupuesto lógico de la pretendida imprescriptibilidad, esto es, una condena que vincule a su parte con delitos de lesa humanidad, por lo que la prescripción de las acciones indemnizatorias debe regirse por las normas de derecho común, ya que, la normativa internacional invocada no le sería aplicable por tratarse de una persona jurídica de derecho privado, agregando, que la normativa citada por la contraria no consagra la imprescriptibilidad de la acción civil emanada de la comisión de delitos de lesa humanidad, a lo que reitera todo lo expresado en la réplica de la contestación del Consejo de Defensa, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles indemnizatorias en los casos de delitos de lesa humanidad, así como lo expresado en la demanda al respecto.

Prosigue indicando, que la demanda se dirige contra Endesa S.A. por la responsabilidad que le cabe a ésta, y a sus ejecutivos, por permitir que el joven trabajador José Abel Coronado quien prestaba servicios en la Central Abanico, de su propiedad, fuera detenido en el campamento en que habitaban los trabajadores y sus familias, detención que no habría sido posible sin la connivencia de los ejecutivos y administradores de la empresa y de las faenas respectivas.

Esta es la razón de que la demanda se dirija contra Endesa, por la responsabilidad que cabe a éste por el hecho de permitir que agentes del Estado ingresaran en sus dependencias y detuvieran a un joven trabajador cuando se encontraban en un campamento de la empresa, bajo la vigilancia de ésta.

Advierte que es grave que un joven trabajador bajo su dependencia y subordinación haya sido víctima de delitos de lesa humanidad, ello al menos configura la responsabilidad civil de la empresa, cuyo deber de cuidado se extiende a quienes se encuentran en sus instalaciones y trabajan como dependientes suyos. Refiere que en la sentencia penal en que se condenó a los agentes del Estado del rango militar, se tiene como hecho acreditado que el joven Coronado era trabajador de Endesa y que fue detenido en un lugar de propiedad



de la empleadora. Este hecho hace evidente la responsabilidad de los ejecutivos de Endesa, y en consecuencia de la empleadora, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garantizar la indemnidad de sus trabajadores. Es un hecho notorio la intervención militar de la empresa y de la Central, en que trabajaba la víctima la fecha de su detención así como es un hecho acreditado que ésta se produjo en un contexto de represión generalizada a quienes eran sindicados como simpatizantes o militantes de partidos o movimientos que apoyaban al régimen constitucional derrotado.

Asegura que los demandantes están legitimados activamente para demandar en un juicio que todos los responsables, por acción u omisión, reparen los perjuicios que se les ocasionaron. El deber de protección que tenía el dueño de un lugar privado (campamento de Endesa) recinto cerrado y protegido de la empresa, en que se permitió e incentivó el ingreso de los agentes del Estado que en definitiva detendrán y harán desaparecer al deudo, determina no sólo la legitimación activa de los deudos de la víctima para reclamar la reparación integral de los perjuicios sufridos, sino además la legitimación pasiva de esta demandada.

Agrega que en la demanda se explican las razones por las que la normativa de derecho público son aplicables también a esta demandada por lo que da por reiterado lo expresado en orden a que la misma empresa reconoce en su Reglamento Interno, su respeto y sujeción a la normativa Internacional sobre Derechos Humanos.

OCTAVO. Que, evacuando la dúplica, la demandada Enel Generación Chile S.A., en primer lugar ratifica todas y cada una de las consideraciones, excepciones y defensas opuestas en la contestación, las que, conjuntamente con lo que se expondrá en lo sucesivo, justificarían el íntegro y categórico rechazo de la demanda deducida en autos.

Refiere, sobre la excepción de prescripción opuesta por su parte, que Endesa y el Fisco ostentan calidades sumamente distintas en esta causa, las cuales no pueden dejar de tomarse en cuenta a fin de resolver la cuestión de la prescripción:

- Respecto del Fisco existe una sentencia en sede penal que condena en calidad de autores a oficiales del Ejército por la comisión de delitos de lesa humanidad. No existe tal sentencia respecto de Endesa, ni antecedente alguno que vincule a ésta o a sus ejecutivos con la comisión de delitos de tal naturaleza.

- El Fisco es una entidad de derecho público, sujeto de una serie de obligaciones y compromisos adquiridos ante organismos internacionales. Endesa, por su parte, es una persona jurídica de derecho privado que se rige por normas de derecho privado en sus relaciones con terceros, y a la cual no resultan oponibles las



normas de derecho internacional en virtud de las cuales la contraria pretende fundar la imprescriptibilidad de su acción.

Es por estos argumentos que debe rechazarse la acción por encontrarse irremediablemente prescrita.

Prosigue su exposición, señalando que para justificar la extemporánea interposición de estas acciones, la contraria señala que “para pretender el derecho a indemnización por ser víctima de un delito penal es requisito insoslayable demostrar con sentencia judicial en sede penal, de carácter condenatorio que se haya declarado la existencia del delito y determinado la autoría del mismo.”

En primer lugar, reitera que no existe una sentencia en sede penal que condene a Endesa ni a persona alguna relacionada a Endesa por los delitos aludidos en la demanda, ni le impute algún tipo de participación. Ciertamente, las sentencias acompañadas por la contraria no lo hacen. Por lo tanto, la excusa esgrimida respecto del Fisco para justificar la tardía deducción de la acción, claramente no es aplicable para el caso de Endesa. Es decir, bajo este argumento, la demanda dirigida contra Endesa debiera ser desestimada.

En segundo lugar, sostiene que es errado sostener que sea necesario contar con una sentencia condenatoria en sede penal para interponer la acción civil indemnizatoria que emana de los mismos hechos. Así lo ha fallado recientemente nuestra Corte Suprema:

“Duodécimo: Que, habiéndose reafirmado que no es procedente contar el plazo de prescripción desde la sentencia condenatoria en sede penal, puesto que el referido artículo 2332 del Código Civil es palmario al disponer que el plazo de prescripción extintiva se cuenta desde la perpetración del hecho dañoso, se torna evidente que los jueces del grado, al computar el plazo de prescripción de la acción deducida desde que se dictó sentencia condenatoria en sede criminal, que estableció la existencia del ilícito penal y la responsabilidad de los agentes policiales y no desde la perpetración del ilícito, incurrieron en contravención formal del artículo 2332 del Código Civil, al fallar en oposición a su tenor literal.

Décimo tercero: Que, además, yerran los sentenciadores del mérito al considerar que la existencia de una sentencia criminal condenatoria por la comisión del hecho que fundamenta la acción deducida, es la que permite la apertura del plazo de prescripción extintiva, condicionando el inicio de su cómputo, no a la perpetración del hecho, como ordena la norma pertinente, sino al resultado del proceso penal, olvidando que la circunstancia de que no exista un pronunciamiento judicial condenatorio en sede criminal, no impide en caso alguno que se tenga por establecido en sede civil la perpetración del hecho ilícito que genera el daño, de modo que ningún efecto condicionante provoca en la causa



llevada en sede civil, desconociendo la diferencia esencial entre la responsabilidad criminal y la responsabilidad civil, por la cual no es requisito de esta última la declaración previa de la primera.”

Expone que la necesidad de sentencia condenatoria, y sólo en virtud de la calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad, sería elemental para alegar la supuesta imprescriptibilidad de su acción, cuestión que no se verifica en el caso de su representada.

Señala que el legislador ha resuelto estos casos expresamente en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil: “Cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el Pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal, si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso.”

Advierte en consecuencia, que para resguardar sus acciones en sede civil, los demandantes debieron haber interpuesto las mismas ante el tribunal competente y solicitar la suspensión del procedimiento hasta la terminación del procedimiento penal. Así lo ha resuelto nuestra Excelentísima Corte Suprema:

“Décimo cuarto: Que, pues bien, incluso en el evento que se considere que la obtención de una sentencia condenatoria penal era imprescindible para que acción civil prospere, corresponde de todos modos al actor iniciar gestión en dicha sede antes de la llegada del plazo de prescripción, contado desde la ocurrencia del hecho ilícito, pues para ello nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento hasta la terminación del proceso criminal, conforme lo establece el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, norma que ha sido soslayada por los sentenciadores del fondo, incurriendo a su respecto, en error por no aplicación.”

Todo esto resulta de suma relevancia, pues el procedimiento penal por sí mismo no interrumpe el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil, como pareciera pretender la parte demandante en autos. Así se ha fallado por nuestro tribunal superior de justicia:

“Décimo séptimo: Que, además y como se observa de su simple lectura, dichas normas carecen de cualquier sustento gramatical, sistemático o de contexto, que permita interpretar que el procedimiento penal interrumpe la acción civil condicionando el inicio del cómputo del plazo de prescripción a la dictación de una sentencia condenatoria, como erradamente concluyen los sentenciadores de la instancia.

Pues, como se viene afirmando, la pretensión civil de naturaleza indemnizatoria que proviene de un ilícito penal tramitada en rito penal simplificado, sólo puede



deducirse ante el juez con competencia civil ordinaria correspondiente a las reglas generales, y debido a la autonomía e independencia de las acciones civiles y penales que derivan de un mismo hecho, la interrupción de las primeras se verifica en la medida que intervenga demanda judicial, la que en la especie sólo se dedujo ya transcurrido el plazo de prescripción contado desde la perpetración del acto, por lo que se extinguió.”

Concluye, que habiendo transcurrido más de 40 años desde la perpetración de los hechos alegados por la parte demandante, no existe argumento alguno para desestimar la excepción de prescripción opuesta por su representada.

A continuación, refiere que la discusión sobre la supuesta imprescriptibilidad de la acción de reparación emanada de la comisión de delitos de lesa humanidad simplemente no cabe respecto de Endesa, quien no ha sido investigada ni mucho menos condenada en relación a dichos delitos, ni como empresa ni sus ejecutivos o ex ejecutivos.

Insiste, que las sentencias acompañadas a la demanda, asociadas a las causa Rol N° 2182-98, condenan únicamente a ex oficiales del ejército por los delitos cometidos en contra de don José Abel Coronado Astudillo. Sólo dichos delitos, perpetrados por oficiales del ejército, fueron calificados como delitos de lesa humanidad por el juez penal. Dichas sentencias no aluden a su representada, ni involucran a ningún ex ejecutivo de Endesa con los hechos materia de investigación, los cuales fueron acabadamente indagados. Consecuentemente, los hechos tenidos por acreditados por el juez criminal no atribuyen a Endesa participación alguna.

Hace presente, que incluso aquellos fallos que han acogido la tesis de la imprescriptibilidad de la acción reparatoria interpuesta por víctimas de delitos en contra del Estado, lo han hecho sólo en especial consideración de la naturaleza que tendría dicha reparación por provenir de la comisión de delitos de lesa humanidad. Es decir, dichas sentencias tienen como base y principio indiscutido la perpetración de tales crímenes por parte de quien se pretende la indemnización. Fuera de dicho contexto, asegura que nuestros tribunales nunca han accedido a considerar imprescriptible una acción patrimonial de indemnización de perjuicios sin norma expresa que consagre dicha imprescriptibilidad.

Por otra parte, reitera que la normativa que permitiría fundar la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil emanada de delitos de lesa humanidad sólo resulta aplicable respecto del Estado, y no respecto de particulares como Endesa. De esta forma, la acción entablada en contra de Endesa no es sino una acción



indemnizatoria por responsabilidad extracontractual regida por el derecho común, que se encuentra larga e irremediabilmente prescrita.

Seguidamente, explica que no se verifican respecto a su representada los elementos que componen la responsabilidad extracontractual. Dentro de dicho capítulo, se hizo evidente la ambigüedad y absoluta indeterminación de los hechos concretamente imputados a Endesa en relación a la detención de don José Abel Coronado Astudillo.

Señala que la contraria en su réplica concretó que el reproche realizado a Endesa se basaría en que la detención de don José Abel, supuestamente empleado de dicha compañía, habría tenido lugar en un campamento habitado exclusivamente por trabajadores; lugar privado, cerrado y protegido por la empresa, y que Endesa habría fallado a sus deberes de empleador, ya sea por acción u omisión, al no garantizar la indemnidad de sus trabajadores y permitir su detención.

A este respecto, insiste que las acusaciones realizadas por la parte demandante carecen de precisiones que resultan relevantes para examinar el asunto. Así, concluirá el período de discusión sin que se haya indicado el lugar concreto donde tuvo lugar la detención, es decir, el domicilio de la familia Coronado Astudillo, a fin de examinar si éste reúne o reunía a la época las características que describe la contraria (es decir, que haya sido de propiedad de Endesa, cerrado y protegido por la misma). Al contrario, de los antecedentes acompañados, pareciera que la detención fue practicada en el domicilio privado del señor Astudillo, fuera de la jornada laboral.

Advierte que tampoco se ha dado mayor detalle respecto de la relación laboral que habría vinculado al señor Astudillo con Endesa para determinar los deberes que serían realmente exigibles a dicha compañía.

Por otra parte, advierte que es sumamente cuestionable la antijuridicidad de la actuación reprochada a Endesa. Con la información disponible a la época, es dudoso que resultara exigible a la compañía oponerse frontalmente a las actuaciones de la autoridad. Más aún cuando los demandantes reconocen que Endesa se habría visto igualmente afectada por la agitación política de la época, al indicar que era “un hecho notorio la intervención militar de la empresa y de la Central (...)”. Refiere que en su demanda la contraria ya había señalado que “[A] causa del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas tomaron el control de esta empresa, exonerando a sus autoridades y nombrando a otras, pertenecientes a las Fuerzas Armadas en servicio activo y otras jubilados de las mismas”

Insiste en el reparo planteado por su parte, en cuanto la inexistencia de una relación causal jurídicamente relevante entre los hechos imputados a mi



representada y el daño alegado por los demandantes, hermanos de una víctima de crímenes realizados por terceros extraños a la empresa; y añade, que la contraria no se hace cargo respecto la observación de pretender una doble indemnización, por haberse procedido tanto respecto del Fisco de Chile como respecto de Endesa, por la supuesta participación que le cabría a ambos en un único delito o cuasidelito sin haber invocado el artículo 2317. Así, acceder a las pretensiones de los demandantes iría en abierta contradicción de la vocación reparatoria y no sancionatoria de la sede civil.

Reitera y mantiene lo señalado en la contestación en esta materia, y reafirma que no concurren los elementos que exige la responsabilidad extracontractual para justificar una indemnización de perjuicios.

A continuación, señala que la parte demandante omite cualquier análisis respecto de las demás excepciones y defensas opuestas por Endesa en su contestación a la demanda.

Advierte que nada se señala respecto de la falta de legitimidad activa acusada por su parte, fundada en que los demandantes, en su calidad de hermanos de don José Abel Coronado Astudillo, carecen de acción para reclamar la supuesta vulneración de los derechos laborales del mismo. Dicha alegación sólo puede impetrarla el trabajador o sus herederos actuando a título del causante, pero jamás terceros extraños a la relación laboral.

Por el contrario, señala que en su réplica, los demandantes, hicieron aún más evidente que en estos autos persiguen la responsabilidad de Endesa fundada en un supuesto incumplimiento de deberes en su alegada calidad de empleadora de don José Abel Coronado, al indicar que éste habría sido detenido en las dependencias de la empresa, lo que haría “evidente la responsabilidad de los ejecutivos de Endesa, y en consecuencia de la empleadora, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garantizar la indemnidad de sus trabajadores.”

Añade que tampoco se alude en el escrito de la parte demandante a la falta de legitimidad pasiva de Endesa, fundada en que dicha empresa es una persona jurídica de derecho privado a la cual no son oponibles los compromisos y obligaciones asumidos por el Estado de Chile en el ámbito internacional; y en el hecho de que su acción supone que el sujeto pasivo de la misma sea un condenado por delitos de lesa humanidad, circunstancia que no se verifica respecto de Endesa.



Agrega que tampoco la contraria ofrece explicaciones que subsanen la improcedencia de las normas y la ausencia de fundamento legal de la acción impetrada en contra de su representada.

Finalmente, reafirma que su parte controvierte todos los hechos que sustentan la demanda de autos en relación a Endesa, y en especial, las acusaciones levantadas por los demandantes en relación a una supuesta “complicidad” o “cooperación” que habría adoptado, ya sea por acción u omisión, la compañía en relación a la detención de su hermano

NOVENO. Que para acreditar sus dichos, los demandantes acompañaron en autos:

Prueba Documental.

A folio 1, acompaña: a) Copia de sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de noviembre de 2010, en causa Rol 2182-98 (episodio Endesa); b) Copia de sentencia definitiva de segunda instancia, de fecha 25 de octubre de 2013, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en la causa citada en el punto anterior; c) Copia de Sentencia definitiva dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en Recurso de Casación contra la sentencia citada en el punto precedente, de fecha 23 de octubre de 2014; d) Certificado de nacimiento de don José Abel Coronado Astudillo; e) Certificados de nacimiento de: doña Elba del Carmen Coronado Astudillo, don Héctor Antonio Coronado Astudillo, doña Gavi de las Nieves Coronado Astudillo, don Patricio Enrique Coronado Astudillo y don Jaime Alberto Coronado Astudillo.

A folio 68, acompaña: a) Certificado de nacimiento de doña María Celinda Coronado Astudillo; b) Certificado de nacimiento de don Juan Carlos Coronado Astudillo; c) Certificado de nacimiento de doña Haydee de Las Mercedes Coronado Astudillo.

A folio 87, acompaña: Informes Psicológicos de daños elaborados por el Programa PRAIS del Servicio de Salud del Maule, respecto de los demandantes: a) Haydée del Carmen Coronado Astudillo; b) Patricio Enrique Coronado Astudillo; c) Héctor Antonio Coronado Astudillo; d) María Celinda Coronado Astudillo; e) Gavi de las Nieves Coronado Astudillo.

A folio 88, acompaña: Informe Psicológico de daños elaborados por el Programa PRAIS del Servicio de Salud del Maule, respecto de la demandante doña Elba del Carmen Coronado Astudillo.

Prueba Testimonial.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

A folio 122 consta la diligencia de prueba testimonial de la parte demandante, testigo que legalmente juramentada y sin tachas, declararon al tenor de los puntos de prueba fijados por resolución de fecha 30 de enero de 2019, y su modificación de fecha 19 de febrero de 2020, lo siguiente:

Comparece Lilian Arias Vergara, quien al punto de prueba número uno (1° Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante.) señala que de montos no tiene idea, que lo que quiere es saber la verdad, el daño que han sufrido todos estos años la une con la familia Coronado al igual que con muchas familias a lo largo de País, buscando justicia por las desapariciones forzadas, ejecuciones, señalando que les truncaron la vida, se desintegraron familias, el sufrimiento ha sido mucho; indica que hay familiares que ya no están y se fueron con esa pena de no saber dónde están y que a esta altura del 2020 no es posible. Refiere pedir verdad, justicia y reparación sobre todo con el *siendo* (*sic*) del Estado no prestaron apoyo a sus trabajadores y hasta el día de hoy se niegan. -

Repreguntada, para que diga, si sabe dónde fue detenido el joven Coronado y por quien, responde que en Abanico, por agentes del Estado, en una camioneta celeste que pertenecía a Endesa, con chofer de Endesa y se los llevaban.

Repreguntada para que diga, si los ejecutivos de Endesa ayudaron a buscar a los detenidos, responde que no, jamás.

Contrainterrogada para que aclare, si ella presencio la detención que describe, responde que no.

DÉCIMO. Que, la parte demandada Enel Generación Chile S.A., aportó en autos la siguiente probanza.

A folio 89, acompaña: a) Sentencia de fecha 24 de diciembre de 2018, dictada por el 25° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago en causa rol N°17018-2017, caratulada “López con Fisco de Chile”; b) Sentencia de fecha 24 de diciembre de 2019, dictada por el 5° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago en causa rol N°16193-2016, caratulada “Arias con Fisco de Chile”; c) Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013, dictada en causa Rol Ingreso N° 10665-2011; d) Columna del profesor de derecho civil, don Hernán Corral, publicada en “El Mercurio Legal” con fecha 6 de febrero de 2013, titulada “Pleno de Corte Suprema y prescripción de la responsabilidad civil por violación de Derechos Humanos”.

UNDÉCIMO. Que, a solicitud de la parte demandada del Fisco de Chile, se acompañó a folio 82, Oficio ORD N° 63297/2020 de fecha 15 de enero de 2020,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

remitido por el Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, el cual señala que los demandantes María Celinda, Elba del Carmen, Juan Carlos, Héctor Antonio, Gavi de las Nieves, Patricio Enrique, Jaime Alberto y Haydée de las Mercedes, todos de apellido Coronado Astudillo, no han recibido beneficios de reparación por el causante Ley Rettig don José Abel Coronado Astudillo, por cuanto son hermanos de este, quienes no están considerados en las Leyes de Reparación N° 19.123 y N° 19.980. Agrega que Juan Carlos Coronado Astudillo, recibe una pensión de reparación Ley N° 19.992 como víctima directa de Prisión Política y Tortura (Ley Valech)

DUODÉCIMO. Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile y a Enel Distribución Chile S.A. como continuador legal de Endesa, por la detención y desaparición del hermano de los demandantes, don José Abel Coronado Astudillo, detenido y desaparecido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional desde el 17 de septiembre de 1973.

Conforme a la documentación aportada en autos y lo no controvertido por las partes, puede darse por establecido, que los demandantes María Celinda Coronado Astudillo, Elba del Carmen Coronado Astudillo, Juan Carlos Coronado Astudillo, Héctor Antonio Coronado Astudillo, Gavi de Las Nieves Coronado Astudillo, Patricio Enrique Coronado Astudillo, Jaime Alberto Coronado Astudillo, artesano en fierro, y Haydee de Las Mercedes Coronado Astudillo, son todos hijos de don José Alejandro Coronado Jeldes y doña María Celinda Astudillo González, al igual que el desaparecido José Abel Coronado Astudillo, hermano de los demandantes.

Además, que en los autos Rol N° 2.182-98, caratulados “Episodio Endesa”, sustanciados ante el Ministro de Fuero de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Zepeda Arancibia, se investigó, entre otros, la existencia del delito de secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo, el que fue declarado judicialmente como víctima del delito de secuestro calificado en sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de Noviembre de 2010, la que fue modificada parcialmente en cuanto a los acusados por la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 25 de octubre de 2013, condenando al ex Mayor Patricio Gustavo Martínez Moena como autor de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado; como cómplice de los mismos delitos el ex Teniente Walter Klug Rivera; y como autor de secuestro calificado al ex Teniente Ismael Humberto Espinoza Silva, sentencia que fue confirmada toda vez que la Excelentísima Corte



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

Suprema, con fecha 23 de octubre de 2014, que rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia. Todos los condenados eran agentes del Estado de Chile, y se estableció que José Abel Coronado Astudillo, fue detenido el 17 de Septiembre de 1973, alrededor de las 07:30 horas, en su domicilio ubicado al interior de la Central "El Abanico", Los Ángeles, por una patrulla de Carabineros pertenecientes a la dotación de la Tenencia "El Abanico", encontrándose actualmente desaparecido;

DÉCIMO PRIMERO. Que, en atención a que la parte demandada de Enel Generación Chile S.A., como continuadora legal de ENDESA, alegó la falta de legitimación activa de los demandantes para alegar la vulneración de derechos laborales de su hermano desaparecido y la falta de legitimidad pasiva de Enel Generación Chile S.A. como continuadora de Endesa, corresponderá hacerse cargo previamente de estas excepciones, en cuanto la estimación de cualquiera de ellas impediría que la acción prospere respecto a este demandado.

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, en primer lugar y respecto a la falta de legitimación activa, la parte demanda de Enel Generación Chile S.A. señala que los demandantes demandan a título personal, una supuesta conculcación de los derechos laborales de su hermano por parte de Endesa, y agrega, que si bien no le consta a su representada la relación laboral sostenida por los demandantes, hace presente que los actores carecen de legitimación activa para alegar la supuesta vulneración de derechos laborales de don José Abel Coronado, puesto que dicha alegación sólo puede impetrarla el trabajador o sus herederos actuando a título del causante, pero jamás terceros extraños a la relación laboral.

En segundo lugar, la demandada Enel Generación Chile S.A. alegó su falta de legitimación pasiva, indicando que los requisitos para la legitimación pasiva no concurren a su respecto, porque Endesa es una persona jurídica de derecho privado, mientras que la acción deducida contempla la obligación de reparación respecto de Estados Parte de los tratados que invoca, calidad que ciertamente su representada no ostenta, y, porque se dirige en su contra una acción de reparación que supone que Endesa ha sido condenada por la comisión o participación en delitos de lesa humanidad, cosa que no es efectiva.

Sobre ambas alegaciones, los demandantes señalaron estar legitimados activamente para demandar en un juicio que todos los responsables, por acción u omisión, reparen los perjuicios que se les ocasionaron. El deber de protección que



tenía el dueño de un lugar privado (campamento de Endesa) recinto cerrado y protegido de la empresa, en que se permitió e incentivó el ingreso de los agentes del Estado que en definitiva detendrán y harán desaparecer al deudo, determina no sólo la legitimación activa de los deudos de la víctima para reclamar la reparación integral de los perjuicios sufridos, sino además la legitimación pasiva de esta demandada.

DECIMO TERCERO. Que, en términos generales, la legitimación constituye un presupuesto de eficacia de todo acto jurídico, siendo definida como “el reconocimiento que hace el derecho a una persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico, derivando dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el sujeto y el objeto del mismo” (Romero Seguel Alejandro, citando a Juan Ladaria. “Curso de Derecho Procesal Civil”. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Primera edición. Pág. 87).

Asimismo, la legitimación en el proceso, o también denominada legitimatio ad causam, ha sido conceptualizada como la potestad que tiene una persona, natural o jurídica, para afirmar e invocar ser titular de un derecho subjetivo material e imputar una obligación a otra, o como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz. Constituye una posición habilitante para formular una pretensión o para dirigirse contra una persona, siendo un presupuesto de fondo o de procedencia de la acción, una exigencia cuya falta determina que no se pueda conceder la petición de tutela judicial solicitada en el proceso.

Esta legitimación, según la posición del sujeto legitimado en la relación procesal, puede ser activa o pasiva.

En dicho sentido, el análisis de la legitimación en el proceso no implica otra cosa que la aptitud para ser parte en un proceso concreto y obtener una sentencia favorable a su pretensión, o de controvertir, desvirtuar o aceptar el derecho con el que acciona la parte activa, y constituye un presupuesto procesal de toda acción que el juez está obligado a revisar, aún con independencia de la actividad de las partes, puesto que implica, en el caso que esta faltare, la imposibilidad del tribunal de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.

DÉCIMO CUARTO. Que, respecto a la falta de legitimación activa, si bien es efectivo que la parte demandante hace referencia a la conculcación de los derechos laborales de su hermano, y que, sin perjuicio de no constarle al demandado Enel Generación Chile S.A. la supuesta relación laboral que tenía este con ENDESA, cabe señalar primero, que dicha relación laboral se encuentra



acreditada en la sentencia definitiva dictada en los autos Rol 2.182-98, (Episodio Endesa) confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 23 de octubre de 2014. Ahora bien, la referencia a incumplimientos de índole laboral no define el fondo de la pretensión deducida en estos autos, que en definitiva, se trata de una indemnización de perjuicios a raíz del desaparecimiento forzado de su hermano y por lo tanto, si bien pudiera desecharse en ese particular sentido la pretensión deducida, no le quita legitimación activa a los actores para demandar la indemnización de perjuicios, por lo que la excepción a este respecto será desechada.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva de Enel Generación Chile S.A. como continuador de ENDESA, en cuanto a su participación en la desaparición de José Abel Coronado Astudillo, los demandantes sostuvieron que los agentes de Endesa jugaron un rol fundamental en la persecución de sus trabajadores, actuando en colaboración con los agentes represivos en la zona. Incluso, señalaron que existió connivencia de los ejecutivos y administradores al permitir que sus trabajadores hayan sido detenidos cuando se encontraban en dependencias, transportes o campamentos de la empresa, haciendo evidente la responsabilidad de los ejecutivos de Endesa, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garantizar la indemnidad de sus trabajadores.

Sobre lo anterior, es menester señalar que la demanda es vaga en dichas acusaciones, no se indican los nombres de los ejecutivos de Endesa que habrían participado en los hechos referidos; no se señala la forma concreta en que la participación de tales agentes se habría llevado a cabo; se señala que la detención de José Abel Coronado Astudillo se produjo por agentes del estado, específicamente Carabineros del Reten El Abanico, relato que también se contiene en la parte expositiva de la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de Noviembre de 2010, dictada en los autos Rol 2.182-98, (Episodio Endesa), en cuanto señala que las víctimas fueron perseguidas y detenidas por agentes del Estado, bajo pretexto que pretendían atacar recintos de detención y/o atentar contra las centrales hidroeléctricas concluyendo que los delitos aparecen cometidos mediante la actuación activa de los agentes del Estado y que se dieron en contexto de un plan político, condenando en definitiva al ex Mayor Patricio Gustavo Martínez Moena como autor de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado; como cómplice de los mismos delitos el ex Teniente Walter Klug Rivera; y como autor de secuestro calificado al ex Teniente Ismael Humberto Espinoza Silva.



Por otra parte, no se ha rendido ninguna prueba en orden a acreditar lo señalado respecto a que los ejecutivos y administradores de Endesa hayan jugaron un rol fundamental en la persecución de la que fueron objeto los trabajadores de Endesa S.A. de la central hidroeléctrica Abanico, en particular, de José Abel Coronado, no siendo suficiente el sólo hecho de mencionarlo los demandantes.

En consecuencia, no siendo posible determinar que la demandada haya tenido algún grado o medida de en el hecho del secuestro y desaparición del hermano de los actores, pues, como ya se señaló, en la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de Noviembre de 2010, dictada en los autos Rol 2.182-98, (Episodio Endesa) confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, sólo se ha logrado acreditar la participación de Carabineros de Chile en la detención y secuestro de dicha persona, y no la participación de ENDESA; y, de la demás probanza aportada en autos, no se desprenden elementos de convicción suficientes para establecer algún tipo de participación de dicha demandada en el hecho que motiva la demanda.

Por lo anteriormente razonado, corresponderá acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Enel Generación Chile S.A. y en consecuencia, se omitirá pronunciamiento con respecto de sus demás alegaciones, puesto que la demanda en su contra será desestimada.

DÉCIMO QUINTO. Que, habiendo ya resuelto lo pertinente respecto a la demandada Enel Distribución Chile S.A, cabe analizar lo correspondiente respecto al demandado Fisco de Chile, señalando que de los párrafos reseñados en el considerando duodécimo, podemos concluir que los hechos descritos en el libelo, fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad del Estado de Chile, tal como dan cuenta las citadas sentencias, en atención a que todos los condenados, se desempeñaban ramas de las Fuerzas de Orden.

Asimismo, se tendrá presente que este punto, la responsabilidad del Estado, no ha sido discutida por la demandada Fisco de Chile, es más, esta ha alegado expresamente que los actores, han sido preteridos de las indemnizaciones monetarias, por ser hermanos del desaparecido o que han sido reparados satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en contra de su hermano, durante la época de la dictadura.

En consecuencia, se tendrá por acreditado que este hecho, el secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas



graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123 a los demandantes.

DÉCIMO SEXTO. Que, en primer lugar y respecto a la excepción de preterición legal de los demandantes, indicando fundamentalmente que la indemnización no puede alcanzar a los actores, en calidad de hermanos de la víctima, resultan inconsistentes los fundamentos de esa parte, toda vez que no existe norma alguna que excluya a los hermanos, del derecho a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial.

No es efectivo que nuestra legislación establezca un orden de prelación genérica para todas las instituciones jurídicas existentes. Por el contrario, cuando nuestro legislador ha querido establecer una prelación lo ha hecho expresamente, como por ejemplo en materia penal, o en materia de derecho sucesorio, o tal como lo señala la demandada, en la Ley N° 16.744. Todo lo anterior, no ocurre en el caso de la indemnización de perjuicios por daño moral, menos aún en aquellas causas que se sustentan en crímenes de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores tampoco ha hecho tal distinción, es así que un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, en esta misma materia, confirmó la indemnización de perjuicios, por el secuestro calificado de la hermana de los actores de aquella causa, cometidos por



agentes del Estado (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol. Criminal N°: 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014, considerando Décimo Sexto). En este mismo sentido, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de segunda instancia, restableciendo la indemnización de perjuicios a favor de la querellante, quien era pariente por consanguinidad en cuarto grado en la línea colateral, es decir “primo” (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, conocido como “Nilda Peña Solari”, parte resolutive).

Cabe citar también, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, aún más reciente, de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Duodécima Sala, que en lo pertinente señala:

“CUARTO: Que, lo anterior significa que el daño moral ocasionado al hermano de la víctima no admite una negativa de entrada en virtud de eventuales omisiones que el legislador habría efectuado y que le afectarían, atendida una cierta lejanía que llevaría implícita la opción ejercida por éste en las leyes antes citadas. Se trata del daño moral causado por la muerte violenta generada por agentes del Estado en una persona con la cual existía un vínculo fraterno, esto es, con quien lo ligaba un parentesco de sangre por ser hijos de los mismos padres y con quien normalmente se creció, esto es, que fue gravitante en la propia formación de la personalidad del hermano sobreviviente.

Así las cosas, acreditado el vínculo, no se puede soslayar lo que aquello significa en términos de lo que ocurre con frecuencia y de allí surge la presunción que es posible construir a partir de dicho dato, con los caracteres de gravedad, precisión y concordancia que corresponde al proceso intelectual de valoración de la prueba, en términos tales que del certificado de nacimiento respectivo es posible acreditar el hecho base, del que es posible inferir la conclusión de que la forzada y violenta muerte de un hermano provoca un natural dolor, menoscabo, afectación, alteración de las condiciones normales de vida de quien tenía un vínculo fraterno que lo ligaba con la víctima. Y que no existe prueba que permita establecer que ocurrió algún suceso que hizo que los dos hermanos se hubiesen distanciado o hubiesen generado algún sentimiento de odiosidad, que tornara en irracional la conclusión que aquí se ha establecido.”

Esta sentencia, cita un fallo de la Corte Suprema que resulta del todo pertinente citar también, a saber causa Rol N° 6686-2016 de fecha 21 de julio del corriente, la que en lo pertinente señala:

“SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto procede acoger el recurso en cuanto ataca la preterición legal de los actores –hermanos y tía de la víctima, adoptada sobre la base de una supuesta decisión del legislador que habría privilegiado el



resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho”.

En atención a lo expuesto precedentemente y tal como se declarará en la parte resolutive de este fallo, se rechazará la alegación hecha por la demandada en cuanto a declarar la preterición legal de los demandantes en su calidad de hermanos de José Abel Coronado Astudillo.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, la parte demandada opuso también la excepción de reparación satisfactiva obtenida por los actores. Al respecto cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que “en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. Cabe señalar además, que la demandada no acreditó en estos autos si el demandante recibe alguno de los beneficios a que hace referencia.



A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el ius cogens que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

DÉCIMO OCTAVO. Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que los actores puedan ser beneficiarios de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, que por lo demás no ha sido acreditado en estos autos, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales ha sido víctima directa o indirectamente.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenida por los demandantes.

DÉCIMO NOVENO. Que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 1973, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil, se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que “*Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...*” y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994¹. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de *ius cogens*, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “*Episodio Tejas Verdes*” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “*Episodio Nilda Peña Solari*” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “*Episodio Villa Grimaldi*”, caratulados “*Ramón Martínez González*”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

¹ Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, Artículo 3: “*Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso: a) Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.*”



En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “*Episodio Nilda Peña Solarí*” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “*Episodio Tejas Verdes*” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas



internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Cabe señalar también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

□



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX

VIGÉSIMO. Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos precedentes de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.980 y las reparaciones simbólicas, en el caso que los demandantes fueran beneficiarios de ellas, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el considerando undécimo, corresponde analizar la procedencia de indemnizar al actor, por el daño moral con ocasión del secuestro calificado de José Abel Coronado Astudillo, cometido por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada Fisco de Chile.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado. Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, tal como se estableció en el párrafo segundo del considerando duodécimo y conforme a los certificados de nacimiento de los demandantes, acompañados a folio 1 y folio 68, se tendrá por acreditada la relación de parentesco entre estos y la víctima directa, José Abel Coronado Astudillo.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, las relaciones descritas, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por los demandantes, en atención a la cercanía inmediata e intimidad que naturalmente une a los hermanos, situación que no ha sido desacreditada por la contraria, presumiéndose con claridad que su pérdida causó un gravísimo desconsuelo, pesar y dolor, más aun considerando las terribles circunstancias del hecho que motivan la presente causa como es el



secuestro calificado del hermano, y que trastornó gravemente su entorno familiar, todo debido a un actuar horrendo llevado a cabo por agentes del Estado.

Dicho padecimiento se ve reafirmado por los Informes Psicológicos de daños elaborados por el Programa PRAIS del Servicio de Salud del Maule, respecto de Haydée del Carmen, Patricio Enrique, Héctor Antonio, María Celinda y Gavi de las Nieves, todos Coronado Astudillo, agregados a folio 87; y de doña Elba del Carmen Coronado Astudillo, agregado a folio 88, informes que en sus conclusiones advierten, común a todos los evaluados, que vivenciaron una experiencia de represión política altamente traumatizante y amenazante, lo que atento contra su estabilidad psicológica individual y familiar, con consecuencias como tristeza de larga data, temor constante, redefinición de los proyectos de vida personales y familiares, quiebre vital; además, la mayor parte de los demandados presenta trastorno depresivo recurrente, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático y revivenciación de los eventos traumáticos.

Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 modificada posteriormente por la Ley N° 19.980 en su artículo 2° en relación con el artículo 18 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares². Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños y conceden a los familiares de las víctimas calificadas por violación a los derechos humanos beneficios de carácter económico o pecuniario (*Sentencia Corte Suprema Rol N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, considerando Décimo*).

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes, debido al secuestro calificado y desaparición cometido por agentes del Estado en contra de su hermano, José Abel Coronado Astudillo, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

² Ley N° 19.123 Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Establece Pensión de Reparación y otorga Otros Beneficios en favor de personas que señala (1992),

□“Artículo 2°.- Le corresponderá especialmente a la Corporación:1.- Promover **la reparación del daño moral** de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.

Artículo 18.- Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.”



VIGÉSIMO TERCERO. Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijadas por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Al respecto cabe señalar que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta, además, es pertinente señalar que conforme al Oficio IPS N° 63297/2020 de fecha 15 de enero de 2020, los demandantes no son beneficiarios de la Ley Rettig ni de ningún otro beneficio otorgado por dicho instituto.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros no encuentra asidero jurídico alguno en nuestra legislación, consistiendo esa defensa simplemente en una extensión de



la excepción de preterición ya rechazada, por lo que se rechazará la alegación de tener en consideración los pagos efectuados a otros familiares para tener en consideración al momento de regular el monto a pagar del daño moral.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del *stare decisis* (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

VIGÉSIMO CUARTO. Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por los actores, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es un secuestro calificado sin que hasta esta fecha se conozca el paradero de la víctima, lo que se conoce como “detenido desaparecido”, implicando ello que sus familiares, los demandantes de autos, no hayan podido darle a su pariente sepultura y practicado los rituales de duelo propios de nuestra cultura e idiosincrasia, ello con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por el demandante, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos José Abel Coronado Astudillo.

Que, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a la víctima directa, truncando su vida a la edad de 20 años como también la de su familia,



durante tan largo tiempo, situación que se mantiene hasta esta fecha; corresponde ahora que los devuelva en alguna medida a su amparo, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

En consecuencia y según lo expuesto, encontrándose acreditada la comisión del delito, la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron y la relación de parentesco de los actores y la víctima, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la desaparición y la irresolución del destino de un familiar en tan vitandas circunstancias.

Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior y ante la urgencia de la demandada de revisar la jurisprudencia anterior, a efectos de fijar el monto de la indemnización se tendrán presente tres fallos dictados en esta materia, los que han de servir como inspiración.

Así en sentencia en causa Rol 2182-98, caratulada “Operación Colombo, Episodio “Carmen Bueno y otro”, de fecha 27 de noviembre de 2015, dictada por el ministro en visita señor Hernán Crisosto Greise, se fijó como indemnización de perjuicios la suma de \$50.000.000.- en favor de la actora, hermana de la víctima;

En causa Rol 26.649-2005, caratulada “Episodio Operación Colombo”, sentencia de fecha 16 de noviembre de 2015, dictada por el ministro en visita señor Jorge Zepeda Arancibia, se fijó para uno de los actores, el hermano de la víctima, la suma de \$40.000.000.

En causa Rol 2182-98, caratulada “Operación Colombo, Episodio “Antonio Cabezas Quijada”, sentencia de fecha 08 de enero de 2016, dictada por el ministro en visita señor Hernán Crisosto Greise, se fijó como indemnización de perjuicios la suma de \$40.000.000 a cada uno de tres actores de la causa, todos ellos hermanos de la víctima.

En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de cada uno de los demandantes en la suma de \$40.000.000.-

VIGÉSIMO QUINTO. Que, la suma se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.



VIGÉSIMO SEXTO. Que, a la solicitud de reconocimiento público de que José Abel Coronado Astudillo fue víctima de un delito de lesa humanidad, condenando al Fisco de Chile a publicar en un diario de circulación nacional, haciendo público lo sustancial de lo fallado en los autos criminales en que se condenó a los oficiales del Regimiento de Los Ángeles como autores del delito de secuestro calificado en contra de sus familiares, con expresa mención de que las víctimas fueron todos trabajadores de Endesa, se rechazará esta petición, en tanto no corresponde a este tribunal decidir respecto a la publicación de una sentencia penal que tiene incidencia en otras personas y además, atendido lo ya resuelto respecto a la demandada Enel Generación Chile S.A. como continuadora legal de ENDESA, es improcedente lo solicitado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**
I.- Que, se ACOGE la tachada deducida a folio 122 en contra de doña Rosa Inés Santana Figueroa, y se RECHAZA la tachada deducida en contra de doña Lilian Arias Vergara, sin costas.

II.- Que, se RECHAZA la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandante Enel Generación Chile S.A.

III.- Que, se ACOGE la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada Enel Generación Chile S.A. y en consecuencia, se rechaza la demanda deducida a su respecto a folio 1.

IV.- Que se RECHAZA la excepción de preterición legal de los demandantes, opuesta por la demandada Fisco de Chile.

V.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva de los actores opuesta por la demandada Fisco de Chile.



VI.- Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil, opuesta por la demandada Fisco de Chile.

VI.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, opuesta por la demandada Fisco de Chile.

VII.- Que se RECHAZA la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

VIII.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a pagar en favor de cada demandante la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones pesos).

VII. Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

VIII.- Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

IX.- Que, se RECHAZA la solicitud de publicación detallada en el considerando vigésimo sexto, por improcedente.

X.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS.-

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. **en Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNXXCFXGBX